

Temas de Historia del Azúcar

Os Plantadores de cana de Pernambuco na primeira metade do século XX: Nascimento, crise e consolidação de uma “classe” agrária*

Guillermo Palacios y Olivares

EL COLEGIO DE MÉXICO

MÉXICO

gpalacio@colmex.mx

Resumen:

Relato de la producción azucarera en Pernambuco, que ha llevado más de un siglo para alcanzar una práctica de desarrollo agrícola regional y que ha tenido que competir con los procesos de industrialización del Sur del País. La modernización adoptada por los plantadores de caña ha empezado a dar muestras de sus efectos después de la 1ª Guerra Mundial, cuyos resultados concurrieron para hacer los ajustes necesarios a aquella industrialización. Con el ascenso de Getúlio Vargas al poder federal, los señores de molinero y los plantadores se han transformado en una clase unida que se adhirió al nuevo régimen, pero que, desorganizada, no ha podido seguir el paso de los productores del Sur. Las demandas de la elite agraria

en cuanto a una financiación pública no tuvieron éxito hasta que, con el “Estado Novo” se manifestó una orientación corporativista, con una revisión sistemática en la agroindustria azucarera. Después de la 2ª Guerra Mundial, con la política desarrollista del Instituto do Açúcar e do Alcool, se han creado fondos especiales para las asociaciones patronales agrícolas y las áreas rurales, fortalecidas por sus padrones preindustriales, han logrado sobrevivir, aunque atravesando una época superada, promoviéndose, así, cambios sustanciales en la modernización azucarera.

Palabras clave: azúcar, Pernambuco, sistemas agrarios

Abstract:

History of sugar production in the state of Pernambuco, which took more than a century to reach a stage of regional rural development and had to compete with industrialization in the South. After World War I, the sugar plantations began to apply modern technology within the industrialization process. When Getúlio Vargas came to power, the plantation owners became a strong social class and joined the new regime. In spite of that, they could not keep up with Southern producer. Public financing demands were not satisfied until the “*Estado Novo*”

[the “New State”] was established and adopted a corporative policy including sugar production. After World War II, special funds for plantation owners associations were approved through development policies carried out by the “*Instituto do Açúcar e do Alcool*”. As a consequence, sugar production was modernized in spite of its pre-industrial standards.

Keywords: sugar, Pernambuco, agrarian systems

ADVERTENCIA

El texto que el lector tiene en las manos necesita ser precedido de una advertencia que sitúe su propia historia. “Os Plantadores de Cana de Pernambuco...” es lo que al final restó de un intento fracasado por escribir una tesis de doctorado sobre la historia de las *Ligas Camponesas* del Nordeste de Brasil, particularmente del estado de Pernambuco, desde su nacimiento en la décadas de 1940-1950 hasta su desarticulación por el golpe militar de 1964. Corría el inicio de los años '70 del siglo pasado y muchos de los doctorandos en historia de universidades anglo-americanas interesados en la historia de Brasil, como era mi caso, teníamos una (más o menos romántica) idea fija en mente: escribir tesis sobre las ya famosas *Ligas*, aprovechando –o no– la estancia del exiliado Francisco Julião, uno de sus fundadores, en Cuernavaca, México. Yo no tuve la precaución de hacer un viaje exploratorio a Brasil (ni a Cuernavaca) antes de definir mi proyecto de investigación y cuando llegué a Rio, en febrero de 1973, esto es, en plena dictadura militar, y comencé el trabajo de campo me di cuenta de que mi propuesta era completamente inviable: toda y cualquier documentación que podía existir en Brasil sobre las *Ligas* estaba resguardada por el Ejército o por la policía política, los temibles DOPS (Departamento de Orden Política y Social), entonces notorios centros de tortura, asesinato y desapariciones de adversarios y opositores del régimen. Se decía que el acceso a esos documentos tenía que ser autorizado también (o recomendado) por la Embajada de Estados Unidos en Brasil. Yo, con mi pequeño problema académico, entré naturalmente en pánico: mi proyecto de tesis se había venido abajo en tan sólo un par de semanas de estancia en Brasil. Dos ángeles de la guardia me sacaron del atolladero: Richard Graham, profesor de historia de la Universidad de Texas, en Austin, que se encontraba en Rio como lo hacía habitualmente en los veranos, y Richard Morse, a la época representante de la Fundación Ford en Brasil, fungieron como muros de lamentaciones y re-canalizadores de tesis en campo (el director efectivo, Stanley J. Stein, estaba en el lejanísimo pueblo de Princeton, N. J. y, al no haber todavía correo electrónico, las cartas se tardaban un mes entre ir y venir, mínimo). Si no era posible investigar la historia de las *Ligas*, dijeron mis consultores, ¿por qué no recuperar entonces la historia de quienes encabezaron en 1964 la represión a los movimientos campesinos en el Nordeste, los plantadores de caña y *senhores de engenho* de la región? Con la aprobación de Stein, eso se convirtió entonces en el tema de mi tesis.

Después de revisar los archivos y la hemeroteca de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Instituto do Açúcar e do Alcool, en Rio de Janeiro, en mediados de 1973 me trasladé a Recife, la capital de Pernambuco, para iniciar la investigación. Localicé sin dificultad la sede de la *Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco* (SAAP), la ‘madre’ de todas las agrupaciones

patronales agrarias del estado, y de la *Associação dos Fomecedores de Cana de Pernambuco* (AFPCP). Me presenté y expliqué que estaba interesado en escribir una tesis sobre la historia de la agricultura cañera en el estado. Tanto en la SAAP como en la AFPCP obtuve sin ningún problema permiso para revisar sus archivos y los depósitos donde se acumulaban los documentos. En ambos casos el acervo estaba compuesto por libros de actas de las reuniones de las directorías y, lo más interesante, por la correspondencia oficial de ambas entidades con organismos oficiales y con organizaciones afines que, a diferencia de los libros que estaban debidamente encuadernados, se encontraba en su mayoría en fajos atados con cuerdas o con cintas, amontonados aquí y allá. Desde luego, también aquí el propósito original de escribir sobre la participación de los plantadores de caña en apoyo del golpe de 1964 quedó comprometido por la escasez de informaciones y, al mismo tiempo, oscurecido por una riquísima documentación, jamás investigada, que daba cuenta de la historia de un segmento de la cuatrisecular elite agraria pernambucana en el periodo más crítico de su trayectoria: el de la aparición de mecanismos industriales para el procesamiento de la caña y la producción del azúcar, las *usinas*, que comenzaron a ser implantadas en las dos últimas décadas del siglo XIX y que provocaron, entre otras cosas, un agudo y doloroso proceso de diferenciación de una ‘clase agraria’ que se había mantenido relativamente homogénea desde la segunda mitad del siglo XVI.

Terminada la investigación en Pernambuco, que incluyó una sencilla pero necesaria organización e inventario de los archivos de la SAAP y de la AFPCP, comencé la redacción de un primer borrador de la tesis que se convirtió en una propuesta formal que entregué a mi director en Princeton en junio 1976. Pocos meses después, gracias a los buenos oficios de una amiga, la historiadora Maria Bárbara Levy, fui convidado a participar en un Congreso de Historia General de la Agricultura Brasileña en Rio de Janeiro, animado y coordinado por una figura central en la crónica de la enseñanza de la historia en Brasil en la segunda mitad del siglo XX, Maria Yedda Linhares. El congreso produjo un ambicioso proyecto de investigación de historia agraria, con énfasis en el estudio de la historia de la agricultura de subsistencia –pues la otra, la comercial, ya estaba relativamente bien estudiada–. Pero el encuentro tuvo otra consecuencia de mucho más largo alcance: fue la base para la creación en 1977 del Centro de Posgrado en Desarrollo Agrícola (CPDA), adscrito a la Escuela Interamericana de Administración Pública (EIAP), de la Fundación Getúlio Vargas en Rio de Janeiro. El Centro –y la EIAP– debían tener publicación propia, y así vio la luz en 1979 el primer (y último) número de los *Cadernos da EIAP*, con un conjunto excelente de trabajos de figuras prominentes de la historiografía agraria brasileña –Maria Yedda Linhares, Antônio Barros de Castro, Francisco Falcão, Ciro Cardoso, Alice Canabrava, entre otros– acompañados por un artículo de principiante, “Os plantadores de cana de Pernambuco...”.

Poco después, una de las crisis cíclicas de la FGV llevó al cierre de la EIAP, a la suspensión de la publicación *sine die* de los *Cadernos* y al cambio de adscripción institucional del CPDA, que se transfirió a la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, su sede desde 1980. El número 1 de los *Cadernos* abrió y cerró una mínima historia editorial. “Os plantadores de cana de Pernambuco” quedaron, así, durmientes y confinados a una publicación sin pasado ni futuro, tan sólo destinados a integrar un volumen que, en algún momento venidero, reuniera mis artículos sobre cuestiones agrarias nordestinas. Poco después la tesis de doctorado originalmente propuesta fue abandonada y sustituida, años más tarde, por otra sobre agricultura campesina en el siglo XVIII.

El tema de los plantadores de caña fue revivido sorprendentemente un año atrás (¡33 años después!) en agosto de 2011, cuando una investigadora canadiense, la Dra. Gillian (Juliana) McGillivray, encontró un ejemplar de los *Cadernos da EIAP* en Rio de Janeiro, en la biblioteca de un amigo común, Heitor Moura, mientras pasaba una temporada en Brasil realizando investigaciones precisamente sobre la sociedad cañera nordestina para escribir un libro que espejara el que había ya escrito sobre el mismo tema en Cuba.¹ En ese mes recibí un correo suyo y mi sorpresa fue mayúscula: Gillian relataba que había leído el artículo, que había hecho investigaciones junto a los plantadores de caña en Recife, y que estaba perpleja pues muchas de las fuentes que yo citaba en el texto ella no había ni siquiera tenido noticia de que existieran. Inmediatamente me vino a la mente el recuerdo de aquellos fajos de papeles viejos acomodados en las esquinas de los salones de la SAAP y de la AFPCP, mal cuidados y peor preservados, y tuve el presentimiento de que alguien, por lo menos en la Asociación –puesto que la SAAP, una entidad centenaria, me había parecido estar consciente y orgullosa de guardar parte de la memoria de la agricultura del estado– pudo haber considerado conveniente o necesario deshacerse de los documentos que yo había consultado (apolillados, agusanados, sometidos a condiciones letales de humedad), con excepción de los libros de actas de 1928 a 1964 que, éstos sí, Gillian pudo consultar. Pero, de acuerdo con su testimonio, toda la rica correspondencia que yo había revisado en los años 1970 había desaparecido, probablemente vendida por kilo o tirada a la basura. Esa pequeña y habitual tragedia historiográfica –la destrucción de fuentes– le da al artículo “Os plantadores de cana de Pernambuco...” una importancia que va más allá de lo que el propio texto dice, pues el exterminio heurístico presuntamente practicado por los diligentes funcionarios de la APCP lo convierte en el último registro de una documentación histórica que ya nadie más podrá consultar (a menos que Gillian prevalezca, encuentre las fuentes y pruebe lo contrario); esto, por sí solo, justifica su re-publicación.

Es evidente que el artículo está fuertemente marcado por ecos de los debates teórico-metodológicos de la época, cuando aún se leía a Kautsky y a Lenin, se descubrían a Gramsci y se mantenía a Marx debajo de la mesa para

resolver —*en la última instancia*— cualquier duda o divergencia. También es evidente que sufre de una redacción densa, llena de frases y párrafos que ahora se antojan barrocos e interminables. Sin embargo, los editores y el suscritor hemos preferido mantener el texto en su versión original, con una muy leve ‘maquillada’, pues lo contrario habría supuesto escribir un nuevo artículo, pero ahora ya sin muchos de los documentos imprescindibles para hacerlo...

GP, Tlalpan, enero de 2013

1 INTRODUÇÃO

1.1 A historiografia brasileira dedicada ao Nordeste tem dado uma atenção substancial, senão exaustiva, à forma ao e ao desenvolvimento das elites agrárias açucareiras e ao papel que cumpriram na estruturação social e econômica da região. Esta atenção, não obstante, está logicamente concentrada no período do auge açucareiro nordestino, em concordância com o enfoque que enfatiza a sucessão de “ciclos” para explicar a articulação de diversas etapas do desenvolvimento do País. Somente alguns autores penetram no século XIX, analisando as últimas épocas do esplendor dos tipos mais representativos dessas elites: os senhores de engenho pernambucanos.

1.1.1 Entretanto, o interesse demonstrado, já lamentavelmente geral para os séculos anteriores e precisando de revisões urgentes, tanto nos seus aspectos teórico-metodológicos, quanto no simples terreno da interpretação, desaparece quase por completo a partir do último quartel do século XIX. O raciocínio que há por detrás desta súbita indiferença está baseado na suposição de que essas elites, que até aquele momento tinham comandado a evolução agroindustrial da zona açucareira, perderam sua importância fundamental com o início da industrialização, desarticuladas pela extinção da escravidão, marginalizadas pelo estabelecimento de relações sociais de produção subordinadas às prioridades e interesses dos empresários industriais e deslocadas dos seus antigos centros de poder pelo que vários autores têm chamado, com termos variáveis, de “penetração” do “capitalismo industrial” nas áreas rurais do Nordeste açucareiro.

1.2 É crença amplamente difundida que a função econômica, o prestígio social e a influência política dos senhores de engenho e plantadores de cana da região cessaram em seus pontos chave a partir do momento em que o Congresso Agrícola de Recife de 1878 optou definitivamente pela moderni-

zação das técnicas manufatureiras do complexo açucareiro regional, como a única alternativa diante da ruína e como a única fórmula para recuperar a competitividade da produção local nos mercados externos. Daí até 1930, os círculos agrários nordestinos teriam caído numa espécie de mediocridade histórica inevitável, à qual a Revolução de Outubro (1930), com suas supostas características industrializantes e urbanas, daria o golpe de misericórdia. A elite agrária, economicamente debilitada pela supressão do trabalho escravo e incapaz de competir com o setor industrial, em desenvolvimento desde meados da década de 1870, teria passado sem pena nem glória à história como um segmento “tradicional” e “pré-capitalista”, cujas capacidades funcionais para o sistema estariam totalmente esgotadas. Os vestígios dessa elite, os reduzidos círculos que se mantiveram em atividade, seja como fabricantes de açúcar, seja como plantadores de cana para o abastecimento das usinas, foram geralmente colocados no compartimento das anomalias históricas, grupos tenazmente aferrados à tradição e à rotina, estorvos à modernização plena do sistema e, sobretudo, responsáveis pelo notável atraso agrícola da região e pelas crises intermitentes do setor açucareiro nordestino. Até de feudais foram acusados.

1.3 A atenção preponderante dada pelos estudos históricos e sociológicos ao processo de industrialização, esta espécie de reação profissional contra a tese do “Brasil-país-fundamentalmente-agrícola”, tem contribuído para ocultar ainda mais o já obscuro campo da evolução dos setores intermediários agrícolas brasileiros e para gerar uma notável incompreensão em torno da problemática enfrentada por círculos que, queiram ou não os especialistas em ciências sociais, continuam até nossos dias a ter grande importância, tanto em termos simplesmente econômicos quanto em relação aos problemas do desenvolvimento político nacional.

1.4 Já existem contribuições valiosas para o esclarecimento dos problemas referentes à mão-de-obra rural, à introdução e evolução de técnicas agrícolas e aos conflitos gerados pela estrutura fundiária nordestina. Mas se esses campos não são mais espaços desertos na pesquisa histórica brasileira, resta praticamente tudo por fazer em relação às origens, ao desenvolvimento e às problemáticas específicas enfrentadas, a partir da industrialização, pelos grupos intermediários agrícolas, pelas classes médias rurais e pela pequena burguesia patronal, cuja importância, pelo menos no caso pernambucano, é crucial para à compreensão de um processo histórico peculiarmente regional e integrado, dentro de moldes específicos, ao desenvolvimento geral do País.

1.5 Selecionou-se o caso dos plantadores de cana de Pernambuco para observar os efeitos da modernização tecnológica sobre um setor agrícola intimamente ligado, pela natureza do cultivo, ao progresso de fabricação industrial.

1.5.1 Como receberam os senhores de engenho e os plantadores o aparecimento e desenvolvimento das usinas pernambucanas? Que mecanismos foram adotados, mantidos ou modificados, para ajudá-los a sobreviver a um período de transição, no começo do qual representavam ainda segmentos de uma extensa classe dirigente, que foi gradualmente deslocada pela aparição de uma “super-elite” industrial, que automaticamente colocou grandes subgrupos da antiga e orgulhosa nobreza da terra na situação de uma pequena aristocracia caída em desgraça?

1.5.2 Em que medida a modernização que acompanhou o processo industrial modificou os padrões de relacionamento socioeconômico na zona açucareira e em que medida essa modernização foi limitada aos seus aspectos tecnológicos e conduzida pelos estreitos canais dos interesses gremiais de cada um dos setores afetados, permitindo a permanência de elementos e traços que, em vias de desaparecimento antes já da fundação das usinas e da alteração do regime de trabalho, receberam um novo prazo de vigência como fatores funcionais de uma industrialização atípica?

1.5.3 Quais foram os efeitos, sobre a mentalidade da classe dirigente agrária e sobre as suas atitudes, do surgimento de um grupo industrial que colocava o trabalho do campo, a virtude e a honra da chamada civilização do engenho, no plano inclinado de uma atividade pouco lucrativa e prestigiosa, condenada a se arrastar, a partir do último quartel do século, à sombra do crescimento industrial?

1.5.4 Finalmente, como essas mudanças foram assimiladas e transformadas em posições gremiais, de classe, para permitir a conformação de uma corrente de interesses caracteristicamente agrícolas, e como esses interesses foram trasladados ao terreno das pressões políticas frente ao Estado Federal, para conseguir um mínimo de controle sobre as decisões administrativas da burocracia central, que servisse a uma problemática cada vez mais integrada –ao mesmo tempo diferenciada– dos objetivos globais do setor industrializado?

1.6 Os conflitos sócio-políticos que sacudiram as áreas rurais nordestinas, entre 1955 e 1964, principalmente a pressão camponesa que se expandiu pelas áreas açucareiras pernambucanas, chamaram pela primeira vez a atenção concentrada de historiadores, sociólogos e especialistas em ciências políticas para uma região que ameaçava converter-se no foco central de descontentamento e tensão do País e, inclusive, de toda América do Sul. Os estudos que começaram a ser elaborados a partir dessas datas, todos respondendo à necessidade de analisar as causas da explosividade regional, referiram-se fundamentalmente aos problemas relacionados com a mão-de-obra rural, suas

condições de vida e de trabalho, e às necessidades e características de um setor agroindustrial açucareiro que constitui a maior fonte de emprego da região. Grande parte desses estudos coincidiram pelo menos em um ponto, ao colocar as causas das tensões sociais da zona rural pernambucana na permanência de uma estrutura fundiária de pouca rentabilidade, no atraso tecnológico do setor agrícola e nos desajustes provocados sobre essas estruturas, a partir dos anos do segundo pós-guerra, quando a reativação da demanda externa e interna produziu a brutal expansão das plantações de cana que, acompanhada por um processo de inflação galopante, aguçou, em níveis insuportáveis, os problemas estruturais do complexo açucareiro. Absorvidos pela ênfase que os modelos teóricos da época colocavam sobre os dilemas do desenvolvimento industrial e atraídos pela localização do descontentamento nas classes trabalhadoras do campo pernambucano, os pesquisadores sociais deram uma atenção mínima às atitudes e expectativas específicas dos setores intermediários rurais, dos plantadores de cana e dos pequenos fabricantes de açúcar, na crença de que o predomínio industrial dispensava a consideração separada da política gremial desses grupos subordinados.

1.6.1 Mas, partindo dessa época de conflito aberto entre as classes trabalhadoras e os proprietários rurais e industriais e procurando testar a hipótese do desenvolvimento dessas tensões a partir do pós-guerra, faz-se evidente que a raiz dos problemas enfrentados remonta, no curto prazo, às próprias origens do processo de industrialização açucareira nordestina, aos moldes nos quais essa industrialização foi realizada e ao papel específico que as elites agrárias desempenhara ao longo de um trajeto de modernização tecnológica iniciado no último quartel do século XIX. Na realidade, os problemas que vieram à tona durante os últimos anos do interregno entre a queda da ditadura varguista e a intervenção militar de 1964 não foram o resultado de modificações conjunturais, mas sim o desenvolvimento lógico de um padrão que se começou a insinuar nos próprios momentos do nascimento da moderna indústria açucareira.

1.6.2 Aceitando esta suposição, caberia então perguntar-se —à luz de problemas e conflitos já presentes anteriormente na zona rural pernambucana— quais foram os elementos que provocaram a explosão dos conflitos sociais manifestados pela primeira vez em atitudes políticas e ideológicas nas áreas açucareiras nordestinas? Qual foi o ponto onde o sistema de relações sociais de produção deu curto-circuito e motivou que uma problemática regional, que já aparecia nos primeiros decênios do século XX, finalmente se convertesse na fagulha que ameaçava provocar uma conflagração nacional, quando o sistema conseguira conter, durante muitos anos, as manifestações contestatórias que só a partir de 1955 foram claramente expressas pelos trabalhadores rurais pernambucanos?

1.7 É de sobra sabido que a modernização técnica da fabricação do açúcar em Pernambuco, iniciada mais ou menos à época do Congresso Agrícola de Recife, não foi acompanhada por um desenvolvimento agrícola que igualasse proporcionalmente os níveis de rentabilidade da indústria. É lugar-comum falar-se de uma agricultura nordestina atrasada, caracterizada por padrões latifundiários de propriedade da terra e recursos aparentemente inesgotáveis de mão-de-obra barata, que desestimulam o investimento na melhoria dos métodos de cultivo e na introdução de técnicas modernizadas. Entretanto, neste lugar-comum escondem-se cem anos de luta constante entre os grupos participantes da produção açucareira, que é preciso pôr a descoberto e analisar detalhadamente, para poder compreender, como alternativa a modelos analíticos predefinidos, as razões que motivaram um desenvolvimento histórico regional que mantém contradições aparentemente insolúveis entre suas coordenadas econômicas e a superestrutura sócio-política dentro da qual esse desenvolvimento se processa.

1.7.1 Lugar-comum é também estabelecer padrões de confronto entre esse setor industrial modernizado e os círculos agrários propriamente ditos, o primeiro lutando por uma depuração crescente das formas capitalistas de produção e os segundos resistindo a esses assaltos em nome da tradição e da rotina. Com base nessa dicotomia por demais simplista, chegou-se a dizer que a usina açucareira e a plantação de cana independente eram dois elementos mutuamente incompatíveis, que representavam estágios diferentes de desenvolvimento capitalista, e as tensões globais do setor açucareiro foram explicadas por uma suposta “penetração” do capitalismo industrial dentro do também supostamente isolado setor rural, cuja estrutura “pré-capitalista” acabaria sendo substituída por novas formas de organização socioeconômica, baseadas nas relações de produção estabelecidas a partir do início da industrialização açucareira em larga escala.

1.7.2 O estudo das atitudes gremiais dos plantadores pernambucanos, sobretudo aquelas manifestadas por meio da associação de classe —o Centro dos Plantadores e Fornecedores de Cana de Pernambuco—, coloca sérias interrogações sobre várias dessas afirmações e mostra o caráter mítico de muitos dos chamados traços culturais fundamentais da elite agrária pernambucana.

2 AS DÉCADAS DE TRANSIÇÃO: DIFERENCIAÇÃO ECONÔMICA E IDENTIDADE SÓCIO-CULTURAL, 1890-1917

2.1 Os plantadores de cana não apareceram em Pernambuco com a instalação das grandes fábricas açucareiras, da mesma maneira que formas capita-

listas de produção antecederam o início do processo de modernização técnica da indústria. A partir do momento em que os engenhos açucareiros foram fechando progressivamente seus fornos e convertendo-se em plantações de abastecimento, primeiro para os engenhos maiores e posteriormente para as fábricas modernas, os proprietários desses antigos centros de fabricação, já propriamente plantadores de cana, iniciaram uma luta paralela ao crescimento das indústrias, para atingir, em face da corrente industrial que parecia delimitar cada vez mais suas áreas de participação, uma integração gradual dentro do desenvolvimento açucareiro e ampliar as margens de lucro e capitalização resultantes de sua colaboração no processo de fabrico e comercialização do açúcar.

2.2 Até os anos do primeiro pós-guerra, no entanto, essa luta inter-setorial caracterizou-se por desajustes notáveis no ritmo da diferenciação a que as indústrias açucareiras deram lugar. Se a diferenciação econômica já era evidente pelo menos desde 1878, quando os empréstimos de capital estrangeiro começaram a ser canalizados pelo Governo Imperial para os núcleos predominantes dentro de uma extensa classe dirigente composta pelos proprietários rurais da zona açucareira, a separação entre plantadores, pequenos fabricantes e senhores de engenho industriais, nos planos social e cultural –e nos seus reflexos políticos– foi um lento processo que se arrastou até que a fundação do Centro dos Fornecedores, em 1918, delimitou nitidamente as divergências de classe que existiam entre os proprietários das fábricas e os proprietários das terras que as abasteciam de matéria-prima.

2.2.1 As causas que motivaram a lentidão desse processo de reacomodação nos estratos superiores da estrutura social da zona açucareira pernambucana parecem encontrar-se, contextualmente, nas condições peculiares que a indústria açucareira no Estado teve que enfrentar a partir de 1898. Mas, os efeitos da modernização industrial pernambucana não foram resultado de um processo de mudança estrutural que se tivesse originado e desenvolvido de acordo com simples leis de causalidade histórica. A linguagem incorporada para descrever os estágios da modernização parece supor que o processo independe de decisões políticas e atitudes pessoais, sem as quais, no entanto, não é possível compreender as deformações a que essa modernização deu lugar em Pernambuco. Nesses anos de transição na diferenciação sócio-cultural do segmento global do senhores de engenho, os grupos industriais incipientes, ainda plenamente identificados com os mesmos valores “tradicionalistas” de plantadores e senhores de engenho, conseguiram não obstante impor um domínio incontestável sobre os outros segmentos participantes da fabricação do açúcar, domínio que contribuiu para manter os interesses e as opções

dos atores restantes em formas subordinadas e condicionadas aos objetivos dos proprietários das usinas.

2.2.2 O processo de formação de um núcleo industrial empresarial, que se pode datar em 1872 com a fundação da Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco, mas que recebe seu batismo definitivo durante a celebração, em 1878, do Congresso Agrícola de Recife, consolidou-se por meio das pequenas associações agrícolas que começaram a aparecer na zona rural pernambucana após o Primeiro Congresso Nacional de Agricultura de 1901.

2.3 Os Sindicatos Agrícolas, como foram chamados, eram organizações patronais que não têm recebido um décimo da atenção que merecem na história empresarial da agricultura brasileira. Nascidos por iniciativa dos círculos agrários dos Estados do Sul durante o Congresso de 1901,² esses Sindicatos tiveram originalmente a função de incorporar as elites agrárias nacionais dentro de uma economia que parecia, na virada do século, encaminhada para um desenvolvimento baseado no crescimento urbano industrial. Os Sindicatos, definidos desde o momento de seu nascimento como agremiações profissionais das diversas elites agrárias, eram uma tentativa de adequação das formas de pressão política, para obter a favor dos setores agrícolas um crescimento proporcionalmente equilibrado diante do setor industrial emergente. A proposta para a sua criação, apresentada por representantes da Sociedade Nacional da Agricultura, era na realidade o esboço de um programa por meio do qual os círculos agrários pudessem modernizar suas formas associativas e incorporar-se como grupos de pressão econômica ao crescimento industrial das principais áreas urbanas. Estas organizações, formadas pelos “líderes naturais” das classes agrárias, serviriam como foco de concentração de capital para inovações agronômicas, cooperativas de produção que se encarregariam da distribuição dos produtos e fundos de assistência para os trabalhos agrícolas, fundos esses que bastassem para deslocar a participação dos intermediários comerciais, prestamistas e comissários, nos lucros da produção rural.

2.3.1 Nas áreas açucareiras, a função dos Sindicatos seria grandemente ampliada pela dependência específica do setor agrícola aos círculos empresariais. Por meio deles, canalizar-se-iam recursos do Governo Federal e das autoridades de cada Estado para complementar o processo de modernização, paralisado a partir do início da política deflacionária do ministro da Fazenda Joaquim Murinho (1898-1902). Esse capital, no caso pernambucano, estaria teoricamente destinado a permitir a progressiva conversão dos senhores de engenho em fabricantes industriais, por meio da criação de usinas cooperativas que

incorporassem capitais e recursos individuais e estendessem os benefícios da industrialização a todo o segmento dirigente das zonas açucareiras do Estado. Dos Sindicatos, saíram escolas técnicas, laboratórios agrônômicos, estações experimentais etc., que levariam a toda a zona açucareira uma modernização até então limitada aos aspectos técnicos da fabricação e da comercialização do açúcar. Em muitos sentidos, as funções que os Sindicatos Agrícolas nordestinos incorporaram nas sucessivas Conferências Açucareiras celebradas entre 1901 e 1911³ pareciam dirigi-los a reestimar a transformação agroindustrial e a tentar, pela segunda vez, a implantação do já fracassado plano de estabelecimento de um crescimento equilibrado para todos os membros das antigas classes dirigentes, em torno da criação dos Engenhos Centrais.

2.3.2 É possível que a pouca atenção despertada por essas agremiações empresariais no início do século se deva ao seu patente fracasso em cumprir os objetivos propostos. Salvo no caso, talvez atípico, do município de Goiana,⁴ os outros Sindicatos Agrícolas fundados na zona açucareira pernambucana, a partir de 1904,⁵ e complementados em 1906 por Caixas Cooperativas Rurais, tiveram uma existência insignificante em termos de organismos de suporte para o crescimento agroindustrial, um pouco devido à escassa atenção do Estado Federal –cuja participação era vital para o funcionamento do esquema– e outro tanto devido ao controle estabelecido dentro deles, por um núcleo de senhores de engenho que, nos decênios anteriores, se transformaram em proprietários industriais. Mas o fracasso dos Sindicatos, nas suas funções de apoio financeiro e creditício à modernização agroindustrial, não implica em que essas associações empresariais tenham permanecido inativas, muito menos que as suas atividades tenham sido irrelevantes para os caminhos adotados pelo processo de industrialização açucareira e para a conformação da política patronal nas áreas rurais. Pelo contrário, o papel dos Sindicatos Agrícolas pernambucanos parece ser vital para compreender as características principais do desenvolvimento agroindustrial do Estado nos primeiros decênios do século. Pode-se afirmar que, fundados para promover a mudança, os Sindicatos converteram-se no instrumento-chave para a consolidação do setor empresarial industrial e do esquema associativo que, em lugar de facilitar a extensão horizontal da industrialização, limitou-a aos interesses dos grupos estabelecidos desde 1878, sabotando constantemente as pretensões dos pequenos fabricantes de substituir suas instalações rudimentares por fábricas modernas, canalizando todos os recursos de capital disponíveis para o seu aproveitamento no setor industrial já existente e negando aos plantadores de cana qualquer direito à modernização dos seus cultivos.

3 SINDICATOS AGRÍCOLAS E PREDOMÍNIO INDUSTRIAL A USAP

3.1 Três fatores fundamentais permitiram uma unidade que, na realidade, disfarçava o predomínio, dentro dos Sindicatos, dos interesses especificamente industriais dos senhores de engenho proprietários de usinas:

a) a incipiente diferenciação sociocultural entre os membros de uma mesma e extensa classe dirigente articulada por vínculos familiares que envolviam usineiros, pequenos fabricantes e plantadores de cana;

b) as ameaças à ordem social estabelecida na zona rural, provenientes dos efeitos imediatos da abolição da escravidão, principalmente a nova mobilidade geográfica que a massa de ex-escravos recebeu como prova quase única da liberdade conseguida;

e) a crise comercial que assolou a indústria açucareira pernambucana desde a virada do século, aprofundada pelo surgimento de São Paulo como um formidável competidor em potencial, dentro do mercado açucareiro nacional.

3.2 Assim, os Sindicatos Agrícolas fundados nos principais municípios açucareiros no início do século foram todos presididos por membros das famílias mais proeminentes de cada área, famílias cujo prestígio e poder econômico antecediam de muito à curta etapa da industrialização. Esses núcleos dirigentes da elite agroindustrial pernambucana, os Barros Barreto, os Amorim Salgado, os Cavalcanti de Albuquerque, os Bandeira de Mello, os Pontual, os Santos Dias, os Carneiro da Cunha etc., eram os mesmos que tinham dado brilho, em 1872, à Fundação da Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco e os que em 1878 organizariam e dirigiriam os trabalhos do Congresso Agrícola de Recife, para assentar as bases institucionais e os moldes programáticos da industrialização do Estado.⁶ Como no caso dos empresários do café de São Paulo, estudados por Warren Dean, a nata da sociedade de engenho de Pernambuco soube manter o controle econômico e político do Estado, não obstante a mudança ocorrida nos meios de produção, com a fundação das usinas.⁷

3.3 Neste sentido, é necessário ressaltar que o processo de centralização de capitais locais foi muito mais importante para o arranque da modernização que a incorporação de recursos exógenos à zona, entendendo-se aí tanto o capital estrangeiro quanto o capital financeiro de origem nacional. Estas duas últimas fontes de financiamento serviram como elementos complementares para uma acumulação local; devido a essa origem local dos recursos mobilizados foi possível que o controle do processo continuasse nas mãos das famílias tradicionais, cujo poder —a despeito de interpretações contrárias— não foi desvanecido pela incorporação eventual de investimentos complementares procedentes de consórcios estrangeiros e de empresas exportadoras do Porto de

Recife. A grande maioria das usinas existentes no final do século era propriedade individual de senhores de engenho impecavelmente tradicionais. Outras pertenciam a firmas incorporadas por eminentes famílias de plantadores e, em algumas, havia participação de capitais agrícolas associados a capitais comerciais urbanos. Só um número mínimo de instalações industriais se achava em poder exclusivo de firmas estrangeiras ou de consórcios não ligados tradicionalmente ao complexo açucareiro.⁸

3.3.1 Esta continuidade no controle dos meios de produção, cuja mudança não foi acompanhada por modificações notáveis na origem social da elite dirigente, pode explicar, até certo ponto, as dificuldades encontradas pelos plantadores de cana e pequenos fabricantes de açúcar no caminho da nítida separação dos seus interesses econômicos, num complexo de padrões de convivência cultural e relacionamento social procedentes de um passado comum que os ligava aos proprietários das usinas e que evoluíam bem mais lentamente que as diferenciações econômicas estabelecidas pela separação do grupo dos senhores de engenho entre usineiros, plantadores e fabricantes rudimentares. Este quadro de unidade entre os três segmentos dirigentes da agroindústria açucareira foi consolidado com a fundação dos Sindicatos Agrícolas e levou aos níveis estaduais o controle da elite empresarial industrializada, com a criação, em 1906, da União dos Sindicatos Agrícolas de Pernambuco - USAP, a federação estadual que reunia todas as organizações municipais. A partir de 1906 e até os anos da primeira pós-guerra, a USAP comandou a evolução da indústria açucareira pernambucana com apelos constantes à solidariedade entre os três segmentos representados nas suas fileiras, enfatizando uma e outra vez a lembrança do passado comum, com o objetivo evidente de manter contidas as tendências divisórias postas em marcha pela industrialização. Fiéis aos postulados originais do programa dos Sindicatos, os pronunciamentos da USAP foram sempre dirigidos para manter abertas as portas a uma possível transformação global de todos os produtores em sócios paritários da fabricação industrial, ressuscitando de vez em quando o sonho dos Engenhos Centrais, da elaboração de planos cooperativos cuja viabilidade nunca foi comprovada, e de pesquisas detalhadas, porém nunca realizadas, sobre as necessidades de capital para a modernização de cada um dos municípios associados. Foi da parte dos senhores de engenho industriais dirigentes da USAP que partiu inicialmente a voz de alarma perante a desintegração social que rofa a unidade do segmento global, à luz da crise comercial da primeira década do século e perante o descontentamento latente entre plantadores e pequenos fabricantes, cada vez menos convencidos de que a industrialização, como se estava efetuando, estivesse realmente orientada para criar condições para um crescimento nivelado de todos os círculos patronais do complexo açucareiro. Os germes de conflito e tensão, porém, foram plenamente contidos pela or-

ganização estadual, até que os desajustes provocados pela demanda externa da década de vinte levaram a um reordenamento, já claramente diferenciado, nas posições gremiais dos participantes da produção açucareira do Estado.

4 MÃO-DE-OBRA: OS MEDOS DA TRANSIÇÃO

4.1 Mas a preocupação principal da USAP, dos Sindicatos Agrícolas e de seus membros individuais desde o início foi evitar que a industrialização provocasse efeitos negativos para a ordem sócio-política e o *status quo* da zona rural, a qual continuavam intimamente ligada às novas elites industriais. Vários estudos anteriores focalizaram entre as causas da indiferença das elites agrárias tradicionais ante a queda do Império, o alarma provocado pela abolição da escravidão e os temores suscitados entre os proprietários de terra pelas demandas agrárias de alguns círculos abolicionistas. Além de outras razões para esta atitude, que escapam ao ojetivo deste trabalho, em Pernambuco —e talvez no Nordeste— parece revestir-se de muita importância, para explicar essa aparente falta de interesse, a incapacidade do Império em oferecer às elites agrárias locais as garantias necessárias para uma transição suave e indolor do regime de trabalho escravo às várias formas substitutivas de exploração semi-servil aparecidas já desde a metade do século XIX.

4.2 Com efeito, conforme se instalava nos círculos agroindustriais de Pernambuco a certeza de que os dias da escravatura estavam contados, os mais preeminentes representantes dos interesses patronais começaram a pressionar o Governo Imperial para que, posto que não era capaz de resistir às correntes abolicionistas, estabelecesse pelo menos as condições institucionais e legais por meio das quais se poderia dar a transição. O Congresso Agrícola de Recife escutou propostas para a estruturação de um Código Rural que fixasse direitos e deveres da mão-de-obra livre, propostas estas muito mais atrevidas e abrangentes do que as que se seguiram durante os anos da Primeira República.⁹ Em 1884, uma nova reunião das elites açucareiras nordestinas se dedicou, desta vez com exclusividade, a tratar dos problemas relacionados com o abastecimento de mão-de-obra às plantações no futuro imediato em que a escravidão perderia vigência.¹⁰

4.3 O Governo Imperial, talvez preocupado com problemas mais urgentes, não prestou atenção às demandas dos distantes círculos agroindustriais nordestinos e às queixas contra tamanha indiferença foram aumentando. Em 1888, já campeava nos salões da SAAP a convicção de que o Império não tinha mais capacidade de transformar as bases institucionais do sistema, nem de oferecer saídas de continuidade que permitissem efetuar essa transição sem

que as características específicas dos regimes de trabalho “livre” já instaurados em Pernambuco sofressem abalos significativos. Mais que a abolição propriamente dita, já por muitos anos reconhecida como inevitável, o que preocupava os círculos agrários pernambucanos era a falta de providências do Governo Imperial para a institucionalização de fórmulas legais que mantivessem a população rural presa às plantações, dependente do seu emprego no corte de cana e obediente às estruturas hierárquicas estabelecidas, que a abolição não conseguiria –como não tinha conseguido o lento processo de emancipação– romper. A República, porém, pareceu ser um pouco mais sensível às necessidades das elites agrárias nordestinas e, antes do fim do século, já tinham sido promulgadas várias leis, tipificando como crime a ser severamente castigado o roubo de produtos agrícolas alimentícios, uma das formas mais comuns de sobrevivência das novas populações “livres” das áreas rurais do Estado.¹¹

4.4 Os padrões de desintegração crescente das grandes propriedades da Zona da Mata de Pernambuco foram cortados drasticamente pela concentração territorial que começou a surgir em torno das grandes fábricas. A formação de núcleos extensos de propriedades médias e pequenas se deteve e o latifúndio se instaurou com a mesma celeridade com que as chaminés das usinas começavam a quebrar o horizonte do Estado. Esta concentração tem sido comumente explicada com base na necessidade das grandes indústrias de assegurarem áreas apropriadas de abastecimento de matéria-prima para suas demandas produtivas, na conveniência de contar com espaços para novas expansões agrícolas e na urgência de limitar as possibilidades de crescimento das unidades produtivas rivais.

4.4.1 A esses motivos da concentração fundiária que acompanhou passo a passo, até o fim da década de 1930, o fortalecimento das indústrias açucareiras, haveria que incorporar outra função, não menos importante, dirigida a subtrair áreas de cultivo que, se deixadas sem ocupação, poderiam proporcionar à população rural que safa da escravidão meios alternativos de subsistência, que repercutiriam numa diminuição do fluxo de mão-de-obra para as plantações canavieiras. É por isso que em Pernambuco do fim do século XIX –e na realidade durante todo o período estudado– as queixas dos círculos patronais agrários seguem um contraponto dentro do qual convivem, simultaneamente, protestos de escassez de mão-de-obra com claras evidências de desemprego generalizado. Foram constantes, durante os dois primeiros decênios da República, as demandas da elite agroindustrial para que o Governo reprimisse a desocupação voluntária da população rural e a incorporasse ao mercado de trabalho, por meio de regulamentos que instituíam a obrigatoriedade do emprego comprovado, sob pena de multas e prisão, a fim de que as plantações pudessem contar com os excedentes de força de trabalho neces-

sários para deprimir, com o aumento da oferta da mão-de-obra, os níveis dos salários rurais e preencher os vazios deixados nas plantações pela supressão do regime escravocrata.

4.4.2 Mas, a despeito de uma maior “responsividade” do governo republicano às necessidades produtivas e patronais dos círculos agrários nordestinos, aquela regulamentação detalhada que os plantadores e senhores de engenho buscaram –nem sempre por todos os meios– para evitar a desarticulação dos mecanismos de controle impostos à população rural, não foi promulgada. Não obstante, os Sindicatos Agrícolas dedicaram, a partir de sua fundação, uma atenção absorvente a esses problemas. Já no Congresso de 1901, um eminente plantador pernambucano apresentou um “Plano de Locação de Serviços” –inicialmente exposto em forma imperceptivelmente diferente na reunião de 1878– que estabelecia um sistema de contratação de trabalhadores rurais por intermédio da máquina administrativa dos municípios. Uma vez contratados, os trabalhadores seriam registrados nas repartições locais e teriam que se sujeitar a um regulamento que continha uma lista interminável de deveres, entre os quais a observância da proibição de reuniões dentro da plantação e a obediência incondicional aos desejos do patrão, tanto aqueles relacionados especificamente com o trabalho agrícola, quanto outros não explicitados, nos quais se incluíam evidentemente as funções de jagunços e guardas armados, em defesa dos interesses políticos e do prestígio social do plantador. O Plano foi aprovado por unanimidade no Congresso, porém sua aplicação foi dificultada pelo temor de que se convertesse num instrumento da luta política dos coronéis que controlavam cada município.¹²

4.4.3 Mas, a partir da fundação dos Sindicatos –que, entre outros efeitos, deram um mínimo de estabilidade à política local, relativamente independente de brigas eleitorais– vários centros açucareiros da Zona da Mata pernambucana começaram a contar, embora limitadamente, com regulamentos similares, destinados a conter as variações na oferta da mão-de-obra e a reproduzir, até onde fosse possível e desejável, as características seculares do domínio exercido sobre a força de trabalho.¹³ As iniciativas de alguns industriais para formar corporações de operários rurais, seguindo a orientação da encíclica *Rerum Novarum*, tiveram igualmente aplicação muito limitada, quase restrita aos municípios da zona norte do Estado, para onde o fluxo da mão-de-obra era menor.¹⁴ A pressão organizada dos Sindicatos, entretanto, dirigiu-se mais no sentido de procurar no Governo Estadual a solução desses problemas, pedindo simultaneamente que as autoridades pernambucanas reforçassem com o peso da lei os regulamentos elaborados pelos proprietários e que complementassem essas medidas com a formação de forças armadas rurais, encarregadas de reprimir a mobilidade da população rural e as ondas de assaltos a

engenhos e plantações. Os regulamentos não foram legalmente sancionados –pelas mesmas suspiciões políticas que motivaram o fracasso do “Plano de Localização”– mas, em 1904, o governo estadual autorizou os proprietários a formar uma polícia privada, o “corpo das vigias”, com atribuições de força preventiva, que poderia deter o suposto transgressor com grande celeridade, antes mesmo de que pudesse cometer o crime. O esquema dos vigias também não funcionou, porque o Estado se negou a financiar a sua contribuição e poucos plantadores se encontravam em condições de solvência para dar-se ao luxo de uma força policial uniformizada. Os moradores armados podiam desempenhar as mesmas funções –que se achavam como tais especificadas em alguns contratos– sem que isso repercutisse em aumentos dos gastos do patrão.¹⁵

4.5 Seguindo a linha já estabelecida pelos Sindicatos, a USAP firmou, desde o seu nascimento, o seu caráter patronal e, reunida na Assembleia-Geral Constituinte, iniciou sintomaticamente suas relações com o Governo Estadual com uma comunicação, primeira nos anais da nova organização, pedindo garantias e segurança para os proprietários rurais das áreas açucareiras. No entanto, nenhuma medida de importância foi tomada pelas autoridades públicas para deter o que os círculos agroindustriais viam como a erosão dos fundamentos de um poder que tinha sobrevivido aos efeitos iniciais da abolição, mas que necessitava de novos moldes sistemáticos para assegurar a sua continuidade.

4.5.1 Entretanto, se a explosão de descontentamento e violência que os círculos agrários pernambucanos tanto temiam desde os últimos anos do Império foi evitada, as condições sócio-políticas da zona rural, a agitação e a instabilidade, a deterioração das normas estabelecidas e dos valores tradicionais da sociedade de engenho –tudo aumentado, na visão da elite, pelo temor coletivo das classes proprietárias– mantiveram a necessidade de unidade e coesão entre os círculos patronais. Esta unidade, como a conseguida pelos laços familiares, facilitou a neutralização das demandas específicas dos plantadores de cana e estabeleceu o contexto para o predomínio dos senhores industriais que controlavam a USAP, sob ameaça de que a desunião dos proprietários, numa época de conflitos tão mareantes, só poderia repercutir num agravamento da situação.

5 CRISE COMERCIAL, CARTÉIS E INDUSTRIALIZAÇÃO: OS IMPASSES DO PROCESSO

5.1 Por fim, dentro desta breve exposição das causas que parecem ter motivado a falta de identidade de classe dos plantadores de cana antes do pós-guerra e permitido o domínio total que os fabricantes industriais exerceram

por quatro decênios sobre os outros segmentos produtores, há que mencionar rapidamente as características e efeitos da crise comercial que paradoxalmente coincidiu com a terna infância das usinas pernambucanas.

5.2 A partir de 1898, quando os compromissos do Governo Federal com os credores internacionais do Brasil determinaram a imposição de uma política deflacionária, que encareceu o crédito e restringiu a circulação de capital,¹⁶ o processo de industrialização pernambucana se deteve, deixando só algumas unidades produtivas plenamente modernizadas, um número majoritário de usinas equipadas com maquinaria insuficiente e uma esmagadora quantidade de pequenos fabricantes incapacitados para seguir o exemplo da cúpula empresarial e transformar suas instalações rudimentares em eficientes fábricas açucareiras. O corte no fluxo de capital diminuiu radicalmente os efeitos “multiplicadores” que poderiam ter sido esperados desta primeira fase da industrialização e o setor açucareiro pernambucano, fracassado em sua tentativa de recuperar os mercados externos e começando a enfrentar a competição dos produtores paulistas nos mercados consumidores do Sul, entrou num longo período de crise e estancamento.

5.3 Os círculos de empresários industriais do Estado, representando os interesses conjugados de plantadores e senhores de engenho perante o Primeiro Congresso Nacional de Agricultura, decidiram que a crise era eminentemente “comercial” e que, como tal, precisava de soluções comerciais para ser superada. O problema específico era: primeiro, encontrar meios para forçar a entrada nos mercados estrangeiros, com base em subsídios à exportação que permitissem –sob as mesmas bases dos produtores europeus de açúcar de beterraba– colocar o produto nacional a preços competitivos que as condições técnicas da indústria não garantiam; e, segundo, repartir entre os maiores fabricantes o crescente mercado urbano do Sul, sobretudo as áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e, em menor grau, Porto Alegre.

5.4 A partir de 1901 e ao longo de toda a Primeira República, várias reuniões dos principais produtores do Brasil, sempre lideradas pelos fabricantes industriais, apresentaram planos sucessivos de acordos interestaduais e inter-regionais que permitissem, na medida das possibilidades produtivas de cada um, maior margem de participação no mercado nacional. Os produtores pernambucanos –frequentemente unidos a Alagoas e Campos como maiores fabricantes do País– assumiram, entretanto, uma postura comercial agressiva caracterizada, não pela depuração progressiva das suas instalações produtivas ou por cortes nos custos de produção por meio da modernização agrícola, mas por esquemas de *dumping* que dirigiam aos mercados externos quotas de “sacrifício”, destinadas a recuperar o equilíbrio interno entre a oferta e a

demanda de açúcar, quer dizer, destinadas a criar uma escassez artificial do produto, no mercado nacional, para estabelecer os preços em níveis convencionais. Mas o êxito deste tipo de mecanismo comercial contrabalançava com os estímulos que davam os preços compensadores à expansão da produção açucareira paulista e fluminense, sem que se cumprissem as cláusulas que estabeleciam formas para nivelar os “sacrifícios” do Nordeste. A política comercial dos empresários agroindustriais pernambucanos tinha, então, que achar o ponto exato em que o esquema das quotas de exportação produzisse condições internas que permitissem uma capitalização razoável para as unidades produtivas predominantes dentro do setor, mas que estabelecesse, ao mesmo tempo, preços suficientemente baixos para que as tendências expansionistas da indústria paulista não se convertessem numa corrida desenfreada que acabasse com a supremacia pernambucana.¹⁷

5.5 As necessidades desta luta interempresarial, camuflada como um confronto de interesses regionais, condicionaram, em quase todos os sentidos, os moldes do desenvolvimento do complexo açucareiro pernambucano e, em nome dessa supremacia inter-regional cada vez mais insustentável, os interesses dos grandes proprietários industriais encontraram campo aberto para se consolidar soberanamente sobre os dos outros segmentos participantes. Esta política de preços baixos, esta instabilidade voluntariamente provocada no mercado açucareiro nacional, para manter em xeque o crescimento do Sul, conseguiu atrasar um pouco o ritmo de expansão paulista, mas de maneira nenhuma detê-lo. Entretanto, o que conseguiu fundamentalmente — e não como um resultado meramente acidental — foi tornar ainda mais críticas as condições financeiras das usinas pernambucanas menos preparadas, dos pequenos fabricantes que não conseguiam margens de capitalização para as inovações mais essenciais e dos plantadores de cana que, dependentes das cotações comerciais do açúcar para o estabelecimento de preços de sua produção agrícola, tinham que aguentar não só o peso dos baixos níveis dessas cotações no mercado nacional, mas, sobretudo, a carga quase completa das ínfimas cotações internacionais, às quais se vendiam as quotas de “sacrifício” — “sacrifício” este transferido diligentemente pelos usineiros aos seus abastecedores, sob a forma de preços correspondentemente reduzidos pela matéria-prima.

6 A CISÃO DA USAP

6.1 A natureza de “faca de dois gumes” dessa política comercial dos senhores de engenho industriais de Pernambuco, que antepunha as possibilidades de um maior desenvolvimento agroindustrial do Estado às necessidades da luta para a contenção do crescimento paulista — luta travada em proporções que

só as grandes empresas industriais podiam suportar— provocou uma primeira cisão nos círculos agroindustriais pernambucanos. Em 1911, a Quarta Conferência Açucareira de Campos foi o palco de um acalorado debate em torno dos futuros rumos da indústria açucareira nacional. Os representantes dos círculos paulistas apresentaram um complexo projeto de acordo interestadual para estabelecer, em bases sólidas, a divisão do mercado nacional, estruturado em torno da exportação dos “excedentes” açucareiros do Nordeste para atingir a estabilidade interna.¹⁸

6.2 Desta vez, os produtores paulistas acompanhavam o esquema da exportação com mecanismos detalhados que compensariam os produtores nordestinos por meio de um fundo cooperativo de todos os fabricantes nacionais, que seria distribuído entre os exportadores para cobrir as diferenças entre os preços mundiais e as cotações internas do produto. A representação pernambucana, composta por alguns dos membros da direção da USAP, aceitou o esquema, concordando em permitir regularidade imprescindível das rendas estaduais, para que a indústria pernambucana pudesse iniciar um processo de capitalização que proporcionasse os recursos para complementar a modernização das unidades industriais menos avançadas e criar usinas cooperativas que incorporassem ao processo de industrialização os pequenos fabricantes e inclusive, os plantadores de cana. O acordo, na justificativa da representação pernambucana, significava uma tentativa de colocar o desenvolvimento da agroindústria açucareira estatal sobre os seus próprios pés, tornando-a independente dos irregulares favores governamentais e condicionando-a somente às capacidades empresariais dos grupos dirigentes. Mas, de volta ao Recife, o voto da delegação foi desconhecido pela fração dominante da direção da USAP numa série de reuniões que ameaçaram, pela primeira vez, quebrar a impecável unidade gremial que a elite agroindustrial tinha até então mantido e que puseram em evidência, trinta anos após o início da modernização técnica no fabrico do açúcar, as profundas divergências de interesses e as necessidades produtivas individuais dos diversos integrantes de um complexo tecnologicamente desequilibrado.¹⁹

6.2.1 No decorrer dessas reuniões, os senhores de engenho de maior antiguidade opuseram-se à participação pernambucana nos acordos interestaduais, porque, na sua opinião, a estabilidade que se alcançaria com a paz comercial resultaria em maiores estímulos à expansão dos produtores do Sul, incomparavelmente mais bem preparados, no aspecto financeiro, para aprofundar o processo de modernização, donos de uma infraestrutura comercial que aproveitava os mesmos canais do complexo cafeeiro e favorecidos pela proximidade do mercado consumidor mais importante do País. Os mecanismos desenhados no projeto paulista para restituir aos produtores nordestinos o “sacrifício

da exportação não compensavam, no dizer dos porta-vozes da oposição ao acordo, o fato de que, enquanto o Nordeste exportava para valorizar o produto, os fabricantes do Sul ocupariam cada vez mais o mercado interno. Não valeram para minorar os temores desta fração da elite agroindustrial as garantias enviadas pela própria Sociedade Nacional de Agricultura, no decorrer das reuniões, de que as cláusulas compensadoras seriam estritamente cumpridas. Por sua vez, assumindo a dissidência, a delegação que tinha assistido à Conferência justificou, defendeu e exigiu a participação pernambucana no esquema, como a única forma de colocar a indústria do Estado numa posição realmente competitiva, diante do ritmo muito mais acelerado de modernização que se dava nos canaviais e nas fábricas do Sul.

6.2.2 Segundo o raciocínio desse grupo minoritário, as possibilidades de sabotar e conter esse crescimento dos competidores eram meramente ilusórias, em vista das vantagens estruturais do setor industrial do Sul. Mais do que procurar deter São Paulo, era preciso que os círculos agroindustriais pernambucanos se convencessem da necessidade de rever radicalmente as condições técnicas do cultivo e da fabricação no Estado, para que Pernambuco pudesse enfrentar, em luta aberta, o desafio dos produtores do Sul.

6.3 A negativa do grupo dominante dentro da USAP em aceitar essa visão e, conseqüentemente, modificar a política empresarial da organização, provocou uma troca de acusações em que ficou claro que a unidade mantida durante a transição do regime dos engenhos ao regime industrial chegara ao limite das suas possibilidades de conter interesses tão diversos. No calor das discussões, os dissidentes apontaram inequivocamente o grupo dominante como um segmento de produtores que restringiam os caminhos da política açucareira estadual, em benefício dos seus próprios interesses, com uma visão que não correspondia mais à realidade econômica e comercial da época e cujos efeitos arruinavam o resto do setor açucareiro, mantendo-o à beira da falência, na infundada esperança de que o mesmo acontecesse com os produtores paulistas.²⁰

6.3.1 Esta posição, que parecia representar a expressão de um grupo mais pujante, verdadeiramente empresarial, foi no entanto derrotada pelo prestígio do grupo dirigente, numa votação final dos membros dos sindicatos filiados à USAP, em que a grande maioria dos presentes se absteve. O segmento vencedor instituiu, então, medidas paliativas para acalmar os ânimos e restabelecer a unidade dentro da federação, atacando o problema da baixa capitalização do setor por meio de uma proposta de fundação de um Banco Rural que, respaldado por recursos do governo do Estado e de taxas especiais sobre a produção agrícola pernambucana, poderia eventualmente proporcionar a

liquidez requerida pelas necessidades de operação e por sua vez servir de respaldo à modernização dos produtores não consolidados. A defesa comercial do produto, o problema dos preços no mercado nacional, foi igualmente depositada nas mãos das autoridades estaduais e o governador Dantas Barreto recebeu o encargo de estabelecer um esquema de financiamento aos fabricantes que tivessem que exportar para executar a estratégia de contenção do Sul no mercado nacional.²¹ Era o mesmo projeto aprovado na Conferência de 1911, mas limitado, na sua aplicação, à esfera meramente estadual.

6.4 Entretanto, se esses retoques institucionais aos problemas da industrialização pernambucana cauterizaram no curto prazo a ferida aberta pela articulação de um grupo empresarial marginalizado, não restituíram a unidade de pontos de vista dentro da USAP, nem evitaram que, nos anos de pós-guerra, esta ferida se abrisse a ponto de provocar tanto a desintegração da organização quanto o rompimento definitivo entre os interesses dos senhores de engenho industriais, que dominavam a política açucareira do Estado, e outros produtores, não menos tradicionais, que eram entretanto prejudicados nos seus interesses expansionistas pela política do grupo dominante.

6.5 A crise gremial de 1911 foi importante por outras razões, além do surgimento da primeira cisão grave dentro da elite agroindustrial. Paralisados pelo temor da concorrência do Sul e incapazes de imaginar novas formas para manter suas posições dentro do sistema nacional, os dirigentes do setor açucareiro pernambucano reconheceram tacitamente, com os pedidos de apoio governamental, o esgotamento de suas habilidades para levar a indústria a novos planos de desenvolvimento e a necessidade vital de uma dependência cada vez maior da força política e econômica do Estado.

7 PÓS GUERRA. EXPANSÃO AGROINDUSTRIAL E DIFERENCIAÇÃO DE CLASSE. A FUNDAÇÃO DO CFCP

7.1 O período de letargia em que a indústria açucareira pernambucana entrou a partir da crise comercial do final do século, chegou ao fim com a conversão da guerra europeia num conflito mundial e com a reativação da demanda internacional do açúcar. Só a partir de 1917-8, quando os canais comerciais desarticulados pelo conflito se restabeleceram suficientemente para dar fluidez à demanda dos países beligerantes é que a indústria açucareira pernambucana, nascida havia mais de 40 anos, encontrou realmente os estímulos para uma expansão acelerada e as condições para a introdução de medidas urgentes de complementação da modernização técnica e sistemática que se tinha paralisado nos primeiros anos do século XX. Depois de vários decênios

de crescimento imperceptível e irregular, a demanda europeia deu início ao mais intenso lapso de expansionismo industrial e com ele vieram, finalmente, os conflitos e as tensões que, amortecidos pela lentidão do processo, tinham sido contidos por tanto tempo dentro da estrutura dos Sindicatos Agrícolas e da federação estadual.

7.2 A ativação do comércio exportador e a alta automática das cotações, tanto nos mercados mundiais quanto nos centros consumidores nacionais, acompanhadas pelo início de uma “campanha da produção”, dirigida pelo Governo Federal, estenderam os canaviais pernambucanos a regiões da Zona da Mata que tinham permanecido até então marginais à produção açucareira.²² As fábricas mais capitalizadas duplicaram, entre 1916 e 1922, suas capacidades de produção e mais de uma dezena de pequenas usinas, nascidas no tempo das vacas gordas, localizaram-se nas áreas úmidas não atingidas anteriormente pela industrialização.²³ A expansão territorial das fábricas, que já tinha provocado o alarma dos plantadores desde o início do processo de modernização, alcançou níveis sem precedentes, reativando as lutas entre diversas empresas pelo controle das melhores áreas – e empurrando extensos segmentos da população rural até então ocupados em precárias atividades de subsistência, em direção às linhas da força de trabalho agrícola, para acompanhar o ritmo da demanda açucareira. Entre os anos do início do conflito e 1922, dobrou, em relação a 1914, o número de senhores de engenho fabricantes que venderam suas terras a usinas e o daqueles que, animados pela demanda de matéria-prima das instalações industriais, fecharam seus fogos e se converteram em abastecedores das empresas.

7.3 Em 1918, dentro deste contexto de crescimento agroindustrial que acabou finalmente com a hegemonia condutora da USAP e dos Sindicatos Agrícolas –que vegetariam ainda por vários anos– um grupo de proprietários, plantadores de cana, congregou-se para fundar, já à margem das outras organizações agrárias do Estado, o Centro dos Fornecedores de Cana de Pernambuco - CFPCP.

7.4 A conjuntura de expansão capitalista dentro da qual se deu a fundação do Centro, os motivos que levaram seus promotores a reunir um segmento disperso, que até então só se tinha manifestado timidamente como classe, com interesses específicos dentro das organizações plurissetoriais dominadas pelos senhores de engenho industriais, e o programa proposto como base da nova agremiação mostram que a cisão ocorrida com a separação dos plantadores de cana –e dos proprietários de engenhos fabricantes incorporados– da frente ampla da antiga classe dirigente rural obedeceu às suas expectativas de integração dentro do crescimento capitalista do pós-guerra e não a uma reação de

grupos agrários “arcaicos” contra setores empresariais ligados à modernização progressiva da indústria, com bases urbanas e objetivos de crescimento dentro dos moldes clássicos do capitalismo liberal. Em outras palavras, nem os plantadores de cana nem os senhores de engenho apareciam em 1918 como os segmentos “tradicionais” e “pré-capitalistas” que os caracterizam em muitas interpretações, nem os empresários industriais pernambucanos se aproximavam do protótipo do capitalista empreendedor que, em nome da eficiência produtiva e do lucro econômico, arrasa com sistemas de valores e estruturas de organização sócio-política que presumivelmente obstaculizara o caminho da modernização. Em vez de se reunirem para dificultar a expansão da industrialização, os plantadores de cana e os senhores de engenho emergiram da primeira reunião do Centro com um programa que se propunha a encontrar formas, ainda esquemáticas e mal planejadas, para alcançar, não a diminuição do ritmo do processo, mas a integração dos seus interesses dentro do sistema em desenvolvimento.²⁴ A partir dessas datas e até os últimos anos do Estado Novo, as escaramuças políticas e econômicas efetivadas pelos plantadores e pelos pequenos fabricantes de engenho integrantes do CFCP tiveram como única finalidade ampliar as margens da participação dos círculos agrários da zona açucareira nos lucros do crescimento industrial.

7.5 A combatividade do Centro, nos seus primeiros anos, esborrachou-se uma e outra vez contra atitudes negativas e hostis da maior parte dos senhores de engenho industriais e contra um sintomático silêncio do governo estadual e das autoridades federais, em relação às reivindicações imediatamente apresentadas pelos círculos pernambucanos. Campanhas tais como as iniciadas pelo CFCP, desde o dia de sua fundação, para alcançar o reconhecimento oficial de sua existência e representatividade perante o Estado e perante as burocracias industriais; pela uniformização dos preços da matéria-prima e abolição dos descontos em função das diversas qualidades de cana abastecida; e, finalmente, por aumentos proporcionais aos incrementos nas cotações do açúcar, só obtiveram resultados parciais. Em sua maioria, as empresas açucareiras do Estado se negaram a aceitar a autoridade do Centro para tratar dos problemas de cada grupo de abastecedores. O governo manteve uma prudente distância de assuntos considerados como “matéria privada”, e só umas poucas fábricas elevaram o preço da cana fornecida, algumas pela “generosidade” e o “cavalheirismo” dos seus proprietários, outras para desestimular a unidade dos plantadores em torno da nova associação.²⁵

7.5.1 Entretanto, as frentes de conflito abertas pelo Centro não evitaram que, em muitos outros níveis, os círculos agrários continuassem a se solidarizar explicitamente com os empresários agroindustriais, fosse quando se tratava de problemas regionais, fosse quando estava em jogo a sua segurança social co-

num como proprietários de terra e grupos patronais. Essa dupla necessidade estratégica de fazer coexistirem níveis de conflito como segmentos produtivamente singularizados, junto com canais de identificação regional e padrões de aliança como membros de uma mesma elite proprietária, foi uma das principais características da relação estabelecida entre plantadores de cana, senhores de engenho e usineiros, já desde o início da industrialização, e se manteve como tal, não obstante a delimitação, por parte dos plantadores, de áreas de confronto e divergências de classe, com a fundação do CFCP.

7.5.2 Já nos primeiros dias do CFCP, esse duplo padrão de conflito/aliança foi claramente evidenciado em dois níveis diferentes. Ao mesmo tempo em que os plantadores tentavam, pela primeira vez, enfrentar gremialmente os empresários industriais, com listas de petições e demandas, o Governo Federal, ampliando o seu controle sobre as economias dos estados, criou o Comissariado de Alimentação Pública - CAP, organismo destinado a coordenar a “Campanha Nacional da Produção”, a fiscalizar as atividades de exportação, com vistas à regularidade do abastecimento de gêneros de primeira necessidade aos mercados nacionais, e a estabelecer o controle de preços sobre os principais artigos de consumo, para conter a elevação do custo de vida nos agitados centros urbanos do pós-guerra. O CAP, freando a especulação, entrou em conflito imediato com os interesses do complexo açucareiro nordestino, aguçando a luta inter-regional com suas medidas de restrição às exportações de açúcar. As tentativas da nova agência federal para limitar os volumes do produto que saíam de Pernambuco em direção aos ávidos mercados internacionais, e para estabelecer cotações máximas no mercado interno do Sul, articularam uma resistência frontal de comerciantes, industriais, senhores de engenho e plantadores de cana pernambucanos, que, reunidos em alarmados comitês de defesa da produção estatal, ameaçaram coordenar o descontentamento regional dentro de um bloco de oposição ao Governo Federal, composto por todos os estados açucareiros do Nordeste. Os comitês de defesa denunciaram violentamente a política do Comissariado como uma intervenção anticonstitucional do Governo Nacional em assuntos privativos dos estados e como uma mal disfarçada tentativa de institucionalizar, como respaldo à sua força, os desequilíbrios no processo de desenvolvimento do País.²⁶

7.6 Apoiados no sacrossanto liberalismo da Primeira República, os senhores de engenho industriais e os plantadores de cana –a despeito de que estes últimos demandaram simultaneamente a intervenção governamental para a resolução dos seus problemas gremiais– plenos de tradição e de orgulho senhorial, confirmavam em 1919, os temores manifestados durante o Congresso Agrícola de Recife, celebrado 40 anos atrás: vislumbravam as coordenadas principais de um esquema nascido nos círculos empresariais do Sul e posto em prática

pela legislação federal extraordinária dos tempos da guerra, que eles viam ser dirigido inequivocamente a transformar o Nordeste açucareiro numa região colonialmente submetida às prioridades e necessidades dos setores mais dinâmicos do Sul do país.²⁷ Dentro desse furor regionalista, as demandas dos plantadores de cana perdiam naturalmente a sua força e paralisavam-se as suas capacidades para pôr em execução medidas de pressão mais drásticas que atingissem seus objetivos de classe, pela constante necessidade de cerrar fileiras em tomo dos interesses do Estado e da região.

7.7 Paralelamente à tensão provocada pela crescente centralização no sistema federal, e com a nítida sensação de serem objetos de uma conspiração proveniente do Sul para frear o crescimento do Nordeste, os plantadores de cana e os fabricantes de açúcar tiveram que enfrentar, pela primeira vez nos anos do pós-guerra, sérios, porém breves, problemas trabalhistas. As condições econômicas geradas pelas repercussões da guerra no país pelo aumento constante do custo de vida, somadas aos ecos dos movimentos revolucionários europeus em Pernambuco, deflagraram, a partir de 1919, uma onda de greves e paralisações nas zonas urbanas que se estenderam rapidamente às áreas açucareiras, centros das maiores concentrações de trabalhadores do estado. O estouro de uma greve operária nas usinas e em vários engenhos de açúcar, coordenada pela Federação Operária de Pernambuco no final de 1919, teve efeitos verdadeiramente traumáticos na mentalidade dos proprietários rurais, muitos dos quais empregavam trabalhadores que participaram ativamente do movimento.²⁸ Como no caso da luta contra o Sul, a agitação das classes trabalhadoras da zona açucareira unificou naturalmente os senhores de engenho industriais, os pequenos fabricantes e os plantadores de cana, num esforço para conter a expansão do descontentamento e reforçar, na metade do maior período de crescimento capitalista que o setor jamais experimentara, os mecanismos de controle social e político da mão-de obra local.

7.8 As demandas dos trabalhadores –diminuição das horas de trabalho, melhoria das condições existentes nas fábricas e engenhos e distribuição de áreas cultiváveis não utilizadas aos sindicatos operários– foram sumariamente rejeitadas pelos círculos patronais, congregados pela última vez em torno da USAP, e o movimento foi finalmente reprimido pela força policial do Estado.²⁹ Mas, as atitudes dos senhores de engenho industriais e dos plantadores de cana diante da ameaça operária, similares em alguns casos e diferentes em outros, ajudam a entender, não as razões que motivaram o fracasso da primeira tentativa de organização das classes trabalhadoras do complexo açucareiro pernambucano, mas sim a evolução da mentalidade empresarial dos círculos agroindustriais do Estado, confrontados pela primeira vez com o fantasma da revolução proletária.

7.8.1 As demandas dos trabalhadores pela diminuição das horas de trabalho tinham recebido um importante reforço e uma incômoda legitimidade com a assinatura, pelo Brasil, dos acordos do Bureau Internacional do Trabalho, organismo dependente da recém-criada Liga das Nações, acordos que comprometiam os Estados-membros a melhorar as condições do trabalho industrial e diminuir os seus horários, com o olhar voltado para a agitação revolucionária que percorria a Europa como reflexo da Revolução Bolchevique. A elite patronal açucareira de Pernambuco, assim como os círculos empresariais de todo o País, protestou energicamente perante o Governo Federal pela aceitação dos termos dos tratados, desenvolvendo a partir desse fato um impecável argumento que, em nossos dias, faria a carreira de qualquer representante do chamado Terceiro Mundo. A agitação revolucionária, diziam os senhores de engenho industriais e os plantadores de cana, era um problema especificamente europeu - e os movimentos locais de protesto só uma imitação fabricada por agitadores externos.

Logicamente, pois, as medidas encaminhadas para resolver o conflito tinham que ser limitadas exclusivamente à Europa. Os governos deste continente – continuava o raciocínio –, principalmente o da Pérfida Albion, incapazes de conter a violência revolucionária com medidas menos custosas, tiveram que ceder às pressões operárias e estabelecer, como medida paliativa, limites aos horários de trabalho. Ora, esta era uma solução que cada país devia poder adotar, de acordo com suas próprias conveniências. Mas, pretender que essa resposta a problemas que os círculos agroindustriais pernambucanos viam – ou imaginavam – localizados a centenas de milhares de quilômetros das suas terras e usinas se convertesse em regras aplicáveis obrigatoriamente a todos os países pertencentes à Liga era uma clara manobra das potências industrializadas, que se ressentiam de um forte movimento operário, para recobrar o terreno perdido em termos de produtividade, impondo às nações com setores industriais incipientes condições de operação que as levariam à ruína. Não sem certa razão, os círculos agroindustriais pernambucanos cheiravam, na súbita preocupação das potências hegemônicas com as condições do trabalho industrial, as mesmas características imperialistas do “humanitarismo” britânico, que tanto lutara para conseguir a abolição do regime de trabalho escravo no Brasil, evitando, com a moralidade vitoriana, que as colônias açucareiras do Império, já em pleno regime de trabalho assalariado, ficassem numa posição de desvantagem diante de produtores como o Brasil e Cuba.³⁰

7.8.1.1 Para a elite pernambucana, a participação do Brasil nesses acordos, tornada possível pela complacência do Governo Federal, foi facilmente assimilada ao quadro conspiratório que se delineava paulatinamente na mentalidade coletiva, mostrando novamente a cumplicidade do Estado e dos industriais do Sul, mais desenvolvidos para deter o progresso nordestino.

7.8.2 Mas, se a agremiação dos plantadores seguiu passo a passo o desenvolvimento do argumento regional e teve, inclusive, o privilégio de apresentar o protesto oficial nos termos anteriormente mencionados, muitos plantadores e senhores de engenho começaram a expressar individualmente teorias e visões das causas da agitação das classes trabalhadoras que divergiam profundamente da simplicidade da interpretação “agitadores externos” - “doutrinas exóticas” adotadas pelos empresários industriais. A partir das greves de trabalhadores de 1919/1920, os círculos agrários pernambucanos começaram a articular as conexões entre a expansão brutal das usinas e o descontentamento das massas trabalhadoras e daí partiram para uma revisão coletiva, já nas reuniões do Centro, das características sociais do crescimento industrial e dos efeitos provocados sobre os seus próprios interesses produtivos e patronais. Foram tecendo, no decorrer da década, uma rede protetora em torno das suas necessidades de proprietários rurais, baseada na urgência da reforma do sistema de industrialização e na imprescindibilidade da intervenção do Estado Federal, para modificar os moldes liberais do processo de modernização, de forma a permitir a continuidade do crescimento econômico das usinas –do qual dependiam os seus interesses setoriais– mas acompanhado de restrições que mantivessem o status quo sócio-político da zona rural, a paz e a ordem das quais dependiam não só o seu direito a pertencer às classes dirigentes porém, cada vez mais, as suas capacidades operacionais como empresários agrícolas.

7.8.3 Em torno desta visão, elaborou-se uma crítica paulatinamente articulada, não à industrialização, nem à “modernidade” –por mais que ela não se encaixasse plenamente na visão existencial de muitos plantadores e senhores de engenho– mas ao contexto liberal que tomava possível esse processo se efetivar, limitando cada vez mais a participação das elites agrárias nas recompensas do sistema, e agora, no pós-guerra, criando perigosos desajustes numa estrutura social cuja manutenção era condição essencial para a sobrevivência dos círculos agrários. À problemática especificamente setorial dos plantadores e dos pequenos produtores, aos já conhecidos e sofridos desequilíbrios provocados nos estratos superiores da estrutura social pernambucana pela acumulação e monopolização, até então irreversível, da renda industrial, nas mãos de um número insignificante de grandes proprietários, as greves operárias do início da década de 20 incorporaram o espectro da “proletarização” das massas rurais –com riscos efetivos para o sistema global e para as capacidades empresariais particulares dos segmentos agrários– e o temor às repercussões nocivas do latifúndio que se estendia como uma mancha cancerosa no corpo aparentemente vigoroso da modernização. Em meados da década, os círculos agrários pernambucanos já estavam plenamente convencidos da necessidade inadiável de introduzir reformas substanciais nos moldes do desenvolvimento capitalista, assim como convencidos também estavam de que o liberalismo

que engalanava o crescimento facilitava a expressão de movimentos radicais entre as classes trabalhadoras da zona açucareira.

7.8.3.1 Não obstante, talvez animados pela época dourada da indústria açucareira do Estado, os plantadores de cana só manifestaram essas preocupações eventualmente, sem transformá-las em atitudes gremiais que colocassem a força da organização por trás das reformas, que pareciam já imprescindíveis. O surgimento, a partir de 1922, de um segmento industrial dissidente –sem nexos aparentes com o grupo opositor de 1911/1912– que, em 1929, aglutinava os maiores fabricantes do Estado e uma plêiade de pequenas usinas,³¹ ambos aparentemente marginalizados pela cúpula da elite agroindustrial, mostrou as dificuldades dos plantadores em colocar em termos claramente políticos suas demandas de modificações nos padrões de expansão das fábricas, e enfatizou não somente a ambiguidade –ou a prudência?– que caracterizava suas atitudes de classe, mas também a persistência de fatores socioculturais que ainda atavam as mãos da elite agrária pernambucana. Encabeçados pelos irmãos Lima Cavalcanti –proprietários de usinas açucareiras das zonas periféricas, grandes criadores de gado e donos do *Diário da Manhã* da capital pernambucana–, os industriais dissidentes congregavam em tomo de si o descontentamento empresarial gerado pelo predomínio político dos interesses estabelecidos desde o início do século e, a partir de 1922, desenvolveram furiosas campanhas jornalísticas contra a política econômica do Governo Federal e, simultaneamente, contra a própria condução oligárquica do Estado, dando lugar, nas páginas dos seus jornais, a frequentes denúncias de arbitrariedades praticadas pelas administrações das usinas rivais contra plantadores de cana, lavradores e trabalhadores rurais.

7.8.4 Mas, os círculos agrários pernambucanos, os segmentos intermediários das zonas rurais, mantiveram um pertinente silêncio diante das simpatias demonstradas pela oposição industrial às suas reclamações contra o sistema aceitando, porém, passivamente, a defesa de seus interesses que aparecia cotidianamente nos jornais dos Lima Cavalcanti. A ascensão de Estácio de Coimbra –um dos maiores usineiros da zona sul do Estado e herdeiro do Conselheiro Rosa e Silva na direção política de Pernambuco– ao governo estadual, em 1926, transferiu os conflitos empresariais entre os grandes fabricantes do plano comercial ao campo propriamente político, e colocou os plantadores de cana e os pequenos produtores de engenho ante a alternativa de seguir a orientação política de uma elite agroindustrial da qual faziam parte, mas que parecia surda às suas demandas de maior participação e cega aos perigos que se acumulavam na Zona da Mata pernambucana, ou seguir a dissidência industrial que atacava as raízes políticas do domínio econômico e comercial dos fabricantes estabelecidos, mas que parecia entender tão claramente como

os próprios círculos agrários as necessidades de reforma do sistema de crescimento açucareiro do Estado.³²

7.8.5 Os plantadores se abstiveram de participar gremialmente das escaramuças da crise política instaurada no Estado, em 1929.³³ no tempo em que, já sacudidos pela tempestade do maior desastre comercial e financeiro do mercado açucareiro mundial, deram seu apoio às reformas propostas pela dissidência à organização cooperativa açucareira do Estado, que permitiria a este grupo de grandes fabricantes descontentes se apoderarem, meses antes da queda da Primeira República, da engrenagem comercial que controlava a maior fonte de renda de Pernambuco.³⁴ Mas se os plantadores respaldaram as modificações introduzidas pela oposição industrial –que, entre outras coisas, estabeleciam finalmente preços uniformes para a matéria-prima agrícola e distribuição, entre fabricantes e plantadores, das perdas derivadas das quotas de “sacrifício” – mantiveram-se, porém, politicamente fiéis ao governo de Coimbra até os momentos finais, coerentes, mais uma vez, com a sua incapacidade de articular numa mesma atitude seus interesses propriamente setoriais, de classe subordinada ao predomínio dos empresários industriais, com suas necessidades políticas de proprietários de terra e membros de uma elite ainda dirigente.

8 OS PLANTADORES E A REVOLUÇÃO DE 1930. A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

8.1 A lealdade política dos círculos agrários pernambucanos para com a oligarquia local que controlou durante todo o período da Primeira República o poder do Estado, findou-se no momento em que o movimento da Aliança Liberal colocou Getúlio Vargas e seu bando de tenentes à frente do Governo Central e Carlos de Lima Cavalcanti, o articulador por excelência da oposição político-industrial ao governo de Coimbra, na Interventoria Federal em Pernambuco. Identificando-se imediatamente com os postulados reformistas do novo regime, postulados dentro dos quais eles mesmos poderiam encaixar suas demandas específicas em relação ao setor industrial, os plantadores de cana e senhores de engenho de Pernambuco, até meados de 1930 sólidos suportes das estruturas políticas tradicionais, colocaram-se já no ano seguinte decididamente ao lado da Revolução de Outubro.

8.1.1 Era como se a mudança de governo e a crise financeira desses dias tivessem liberado finalmente neles uma agressividade de grupos intermediários, deslocados do crescimento econômico e das decisões políticas, até então contidas pelos imperativos das suas relações e vínculos sociais com a cúpula da burguesia agroindustrial pernambucana. Jamais como nos primeiros anos da

nova década foi tão evidente a capacidade da elite agrária para acompanhar objetiva e friamente as mudanças no sistema político do País, assimilando as modificações imprescindíveis e as modelando, na medida de suas necessidades gremiais, e nunca foi tão patente a riqueza das reservas “táticas” que essa elite podia mobilizar para seguir a evolução no sistema, sem ter que sacrificar os elementos essenciais à continuidade da sua importância sócio-política. Movimentando-se na esfera política, estabelecendo desde o primeiro momento vínculos de solidariedade e suporte gremial às novas diretrizes do Estado e, na esfera econômica, pressionando na metade da crise com dois movimentos de greve empresarial os pontos mais sensíveis do complexo de relações de produção da agroindústria açucareira pernambucana, os plantadores entraram na década de 1930 com uma agressividade de classe coesa que contrastava marcadamente com a inércia e a timidez dentro das quais os seus próprios vínculos às bases políticas da oligarquia tradicional os tinham mantido, desde o início do processo de industrialização.³⁵ Diante dessa conjuntura de crise financeira e agitação política, as elites agrárias pernambucanas colocaram em movimento todos os recursos disponíveis de pressão, antes de que o regime recém-instaurado atingisse a estabilidade e a consolidação institucionais que o fariam inacessível às demandas dos grupos subordinadamente colocados dentro da imutável hierarquia dos interesses econômicos no País.

8.2 As diretrizes gerais do crescimento industrial de Pernambuco não foram significativamente modificadas com a passagem do sistema de modernização técnica baseada nas pautas do liberalismo econômico para um modelo que colocava a intervenção federal como requisito indispensável para a continuidade da expansão capitalista do Brasil. Mas, dentro das novas regras do jogo, a capacidade de resistência da agroindústria açucareira nordestina aos embates dos produtores do Sul foi imensamente reforçada. Ao amparo da política econômica e comercial instituída por Vargas, que reproduzia, nos seus pontos centrais, os falidos esquemas de organização do mercado nacional que os produtores nordestinos tinham experimentado nas décadas anteriores, procurou-se a consolidação, em nível nacional, de um complexo agroindustrial crescentemente deficitário e cada vez menos preparado para seguir o ritmo de expansão dos outros produtores açucareiros do País.

8.3 A depressão dos anos iniciais da década levou os produtores pernambucanos —afirmemente apoiados pelos plantadores de cana, como em qualquer outro problema que afetasse os destinos regionais— a demandar do novo governo o estabelecimento de medidas que resolvessem o problema da “superprodução” do açúcar no Brasil, impondo aos recém-instalados dirigentes a convicção de que as crises intermitentes do setor açucareiro nacional vinham dos grandes desequilíbrios entre a oferta crescente do produto —responsa-

bilizada nos novos interesses do Sul que penetravam no mercado— e uma demanda que, em termos gerais, se mantinha relativamente estacionária. Para os produtores nordestinos, a solução se achava, não em estímulos ao consumo —impraticáveis na época, mas que mais adiante se poderiam converter em brechas para uma maior participação do Sul— mas sim em restrições às possibilidades produtivas de cada Estado, acompanhadas por uma política de preços controlados, que permitisse, nesse esquema de quase monopólio em favor dos produtores tradicionalmente estabelecidos, a sobrevivência do complexo açucareiro nordestino.³⁶

8.4 No decorrer da década, os conflitos políticos gerados pela polarização ideológica do País, principalmente o fortalecimento e a militância do Partido Comunista, foram habilmente manipulados —e exagerados— pelos empresários açucareiros nordestinos e, por sua vez, pelas elites agrárias pernambucanas, para dar às dificuldades da agroindústria regional, inclusive às prioridades particulares de cada segmento produtor, as dimensões de verdadeiras crises que comprometiam a própria Segurança Nacional. Aproveitando os efeitos visíveis da depressão nas áreas açucareiras pernambucanas, o desemprego e as migrações generalizados, os assaltos e a violência esporádica das massas rurais, criou-se uma prioridade política, justificativa do protecionismo oficial, para manter a viabilidade econômica de um setor agroindustrial produtivamente ineficiente, mas imprescindível, a curto prazo, por seu caráter de fonte quase exclusiva de emprego para imensas porções da população rural dos estados açucareiros nordestinos.

8.5 Politicamente, a expansão dos produtores do Sul tinha que ser freada, de acordo com o argumento básico dos empresários pernambucanos, para evitar que com ela viesse a falência definitiva das usinas nordestinas, à qual se seguiriam, conforme demonstrava a crise dos primeiros anos da década, comoções sociais inevitáveis que poderiam ser partidariamente articuladas para dar passagem à agitação radical entre as massas trabalhadoras da região. Paralelamente, o freio a essa expansão se justificava também em termos do desenvolvimento global do Sul —um argumento bem mais convincente, já que permitiria aos estados nordestinos a capitalização necessária para criar excedentes que seriam transferidos aos centros avançados da economia nacional, por meio da integração funcional da região dinâmica geral do sistema como mercado consumidor de artigos manufaturados e produtos alimentícios, satisfazendo parcialmente as necessidades da oferta dos produtores não-açucareiros de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

8.5.1 Este raciocínio, enfatizado repetidas vezes tanto por representantes parlamentares dos empresários pernambucanos ante o Congresso Nacional, quan-

to por altos funcionários do IAA diante de audiências compostas por empresários têxteis e pecuários desses estados, e apresentado como o sentido da “Política Nacional do Açúcar” –com dados sobre a mesa, para mostrar os enormes superávits que se acumulavam na balança comercial de São Paulo com os estados nordestinos– equivalia a uma aliança tríplice de usineiros e plantadores de cana pernambucanos, produtores não-açucareiros do Sul e a agência do Governo Federal, para reforçar o círculo vicioso da dependência exclusiva de Pernambuco –e da região nordestina– em relação à indústria açucareira tal como aparecia na metade dos anos trinta: monocultora, latifundiária e baseada no uso extensivo de mão-de-obra barata. Implicava, do outro lado da moeda, no compromisso tácito da burguesia industrial e da elite agrária pernambucanas em desestimular a diversificação econômica e manter não desenvolvidas outras capacidades produtivas do Estado, tanto para evitar uma pressão indesejável sobre a oferta dos fatores da produção, principalmente terra e mão-de-obra, quanto para conservar Pernambuco na condição de um mercado “cativo” para as exportações industriais e agropecuárias das áreas mais dinamizadas do País.³⁷

8.5.2 Dentro desse contexto geral, a elite agrária pernambucana teve que suportar, durante a primeira metade da década de 1930, as consequências das facilidades oferecidas pelo Governo Federal ao crescimento da indústria açucareira do Estado, à base de um regime de quotas estaduais de produção, que manteve até 1949/1950 a hegemonia pernambucana. Mas, se a compatibilidade política entre as elites plantadoras do Estado e o regime supostamente antioligárquico instaurado pela Revolução de Outubro foi plenamente demonstrada em outubro de 1931, quando os plantadores de cana e os senhores de engenho pernambucanos “honoraram suas tradições”, colocando suas funções de coronéis e suas forças armadas de moradores e agregados a serviço da Revolução para reprimir uma intentona de contragolpe que se estendeu do Recife aos principais municípios canavieiros,³⁸ as dificuldades dos plantadores em se integrar ao crescimento industrial se agravaram, com a promulgação de uma extensa legislação federal açucareira que, ao mesmo tempo que estabelecia as condições institucionais para lubrificar o desenvolvimento industrial, deixava irresolutos os problemas do setor agrícola.

8.6 A partir de 1933, os usineiros pernambucanos começaram a se beneficiar de um sistema de preços garantidos, financiamentos diretos do IAA para sua produção e empréstimos para melhorias técnicas e instalações para o fabrico de álcool, derivado da “superprodução” do açúcar. A despeito dos protestos ininterruptos dos círculos agrários, as leis e os decretos federais permitiram e

sancionaram a continuidade da dependência financeira tradicional dos abastecedores de matéria-prima em relação às usinas. As repetidas demandas da elite agrária para que fossem estabelecidos mecanismos de crédito direto aos seus trabalhos agrícolas e fornecidos recursos para a fundação de instituições bancárias que se dedicassem exclusivamente a financiar atividades do campo foram sistematicamente rejeitadas pela burocracia federal. Pior ainda, as dificuldades financeiras da maioria das fábricas –somadas aos temores dos empresários de que a elite agrária se achasse com a força necessária, diante de um Estado relativamente vulnerável, para impor suas reivindicações ao setor industrial tal como acontecera com as paralisações agrícolas e industriais de 1932– motivaram a supressão do segmento de plantadores arrendatários das usinas –um verdadeiro Cavalo de Tróia dos abastecedores proprietários– e a grande maioria das áreas próprias das usinas passaram a ser trabalhadas, a partir de 1934 –alegando imperativos de “modernização”, mas sem que fossem modificadas as técnicas de cultivo–, quase que exclusivamente por administração direta.³⁹

8.6.1 Por outro lado, desde a primeira safra da limitação açucareira, 1934-5, até os últimos anos do decênio, as empresas mais poderosas –muitas delas veteranas da oposição industrial, que tanto defendera os interesses dos plantadores diante do grupo de Coimbra– iniciaram uma política de expansão gradual dos seus cultivos próprios, que, em nome da regularidade do abastecimento e da eficiência do sistema global de fabricação, aproveitou brechas voluntárias ou involuntárias na legislação federal, para dificultar o abastecimento normal por parte dos plantadores proprietários, negando financiamentos, rejeitando colheitas externas ou recebendo-as como matéria-prima “extraquota”, a serem pagas a preços inferiores aos estipulados pela lei, e evitando em geral que a estabilidade comercial proporcionada pela intervenção governamental resultasse na consolidação e na afirmação dos interesses da elite agrária dentro do processo de crescimento industrial.⁴⁰

8.7 O reinício da expansão das usinas pernambucanas, desta vez garantida pelo protecionismo do Governo Federal, provocou tensões agudas nas áreas rurais pernambucanas dentro dos moldes já manifestados nos anos do pós-guerra. Maiores áreas de terra foram incorporadas –como “quota de produção”– às extensas propriedades industriais e o processo de erosão da sociedade rural por meio da transformação cada vez mais acelerada de importantes contingentes de mão-de-obra agrícola em assalariados das fábricas e pela migração constante dos “excedentes” da força de trabalho, que não achavam ocupação no setor industrial –que reproduzia na sua capacidade de

emprego as limitações da produção açucareira—, para outras regiões do País, imprimiu maior urgência às demandas da elite agrária para que o Governo Federal cumprisse aquilo que os plantadores achavam que tinha prometido: a introdução de reformas profundas e efetivas, que tornassem possível um crescimento paralelo do setor agrícola.

8.7.1 Economicamente debilitados pela limitação da produção e pela expansão dos cultivos das fábricas, que diminuía —pelo menos no caso das empresas mais poderosas— a importância de suas funções produtivas, os plantadores de cana e os senhores de engenho, também vitalmente prejudicados e marginalizados pelos programas de defesa da produção industrial açucareira, reforçaram, com uma incessante pressão gremial perante as autoridades estatais e federais, aqueles níveis da sua participação onde podiam exibir trunfos ainda importantes. Ao mesmo tempo em que os empresários industriais continham os protestos dos produtores do Sul contra a política restritiva do IAA, por meio de ameaças de desemprego e radicalismo político das massas rurais no caso em que suas fábricas se vissem desprovidas da ajuda do Governo Federal⁴¹ a elite agrária elaborou o mesmo argumento, transferindo-o da esfera inter-regional —sem desconhecer, porém, sua vigência nesse sentido— ao contexto dos conflitos locais dos municípios canavieiros, mostrando às autoridades governamentais que o perigo que os empresários localizavam na competição regional era, na realidade, inerente a uma expansão capitalista, cujos efeitos sociais não tinham sido atendidos, malgrado a intervenção federal.

8.7.2 Os efeitos dessa expansão, a forma socialmente descontrolada como se dava, neutralizavam e anulavam os sistemas de controle que os engenhos e as plantações tinham elaborado para salvar o período de transição da escravidão às formas “modernas” de trabalho forçado e criavam desajustes sócio-econômicos cada vez mais explosivos que, se continuassem, acabariam por inclinar a balança na direção —também— de extremos políticos incompatíveis com a ordem estabelecida. A desastrosa seca que entre 1936 e 1938 assolou as zonas açucareiras do Estado, provocando a diminuição de quase 50 % do total da produção açucareira pernambucana e determinando o fechamento de inúmeras fábricas e o abandono de dezenas de plantações, mostrou a vulnerabilidade da agroindústria açucareira pernambucana e confirmou tanto as advertências dos empresários industriais quanto os velhos temores da classe dirigente agrária em relação à potencialidade de radicalismo e revolta subjacentes nas populações rurais do Estado.⁴² Milhares de trabalhadores desempregados e retirantes de outras áreas de Pernambuco, que passavam pela Zona da Mata sem achar fontes de trabalho, dirigiram-se ao Recife e às outras contadas áreas urbanas de importância e, por toda a zona rural, espalhou-se um tal clima de insegurança e violência que muitos plantadores e senhores de engenho pre-

feriram fugir de suas propriedades até que a volta das chuvas acalmasse os ânimos das massas desempregadas e desaparecessem as ameaças de saques e assaltos generalizados contra as despensas e os armazéns das Casas-Grandes da zona açucareira.⁴²

8.8 A ajuda financeira do Governo Federal e do Estado de Pernambuco foi finalmente canalizada para os empresários industriais, para permitir-lhes, por meio do início de obras de irrigação e melhorias das vias de transporte nas suas terras, manter inalterados os níveis imprescindíveis de mão-de-obra e evitar que a migração maciça que se delineava complementasse o descalabro financeiro e provocasse a descapitalização total do setor açucareiro do Estado. Mais uma vez, como na metade da Depressão, o Estado Federal ignorou as demandas da elite agrária para que lhe fossem outorgadas facilidades financeiras de urgência que a capacitassem para uma recuperação paralela à que, na base de recursos públicos, ocorria nas usinas. Mas, a despeito da nula responsividade do Estado às necessidades de plantadores e senhores de engenho nesses momentos da maior crise sazonal da história da zona açucareira, o final da seca marcava o início de um período em que fatores de natureza variada, tanto os ligados diretamente com a seca e suas consequências, quanto os processos que se desenvolviam em outras partes do País — e do planeta— conjugar-se-iam para colocar, precisamente na saída desta desastrosa experiência da agroindústria açucareira pernambucana, as condições que introduziriam finalmente, ao compasso do ritmo corporativo do Estado Novo, muitas das reformas demandadas pela elite agrária pernambucana.

9 O ESTADO NOVO. RESSURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO

9.1 Para os plantadores de cana e senhores de engenho de Pernambuco, o Estado Novo, em muitos sentidos, foi uma época que pareceu estabelecer as bases para uma verdadeira restauração dos direitos hereditários da pequena burguesia agrária do Estado. Os elementos que tomaram possível essa mudança, talvez mais que possível, inevitável, eram o resultado de cinquenta anos de industrialização dirigida e dinamizada por fatores exógenos à região e só se explicavam dentro da conjuntura especialíssima que Pernambuco — e o resto do Nordeste açucareiro— atravessou entre 1938, o último ano da grande seca e o primeiro do Estado Novo, e 1942, quando o sistema de limitação da produção açucareira nacional começou a cambalear pelos aumentos da demanda interna e externa, enquanto a virada da Segunda Guerra Mundial em favor dos Aliados abalava a influência e o poder dos círculos políticos brasileiros que tinham simpatizado com as potências do Eixo. Entretanto, durante esses anos, quando em todos os engenhos e plantações de Pernambuco se falava de um “novo espírito”, os membros das classes dirigentes não puderam

separar a súbita atenção que o Governo Federal parecia prestar finalmente às suas necessidades, do contexto corporativo, profascista e autoritário do Estado Novo. Ditadura e ressurgimento chegaram juntos.

9.2 Os problemas postos a descoberto pela grande seca, a virada da política federal, com a instalação já indisfarçada de uma orientação corporativista em 1937, e o início e progresso da Segunda Guerra Mundial nos anos imediatamente posteriores, foram três elementos-chave que deram rédea solta em Pernambuco a um movimento de “correção” dos moldes do desenvolvimento industrial açucareiro. Este movimento integrou-se a uma corrente mais ampla, dirigida pelas autoridades federais para “corrigir”, com a promulgação do Estatuto da Lavoura Canavieira em 1941 as tendências do capitalismo açucareiro em nível nacional, procurando uma maior integração dos segmentos intermediários da agroindústria açucareira dentro do crescimento industrial extraordinário da época, com base em argumentos e justificativas que pareciam esboçados de acordo com as abordagens reformistas mais íntimas das elites agrárias pernambucanas.

9.3 A partir de 1938, as autoridades e os ideólogos do Estado Novo começaram a refletir publicamente sobre as consequências da expansão das usinas açucareiras, sobretudo nos aspectos agrários, e a propor uma revisão sistemática das bases de um processo que vinha dos últimos anos do Império. Junto à quantidade assustadora de conflitos e contradições que se tinham acumulado na Zona da Mata à raiz da industrialização, os benefícios derivados e os avanços alcançados, em termos do desenvolvimento global do setor açucareiro nordestino e da sua funcionalidade para o sistema nacional, pareciam ser consideravelmente modestos.

9.4 A industrialização das áreas canavieiras tinha criado uma burguesia empresarial cujos interesses prioritários e cuja identificação de classe a ligavam mais frequentemente ao Sul do País que a Pernambuco, ou mesmo ao Nordeste, e cujo fortalecimento não trouxera consigo o início de um processo auto-sustentado de acumulação que incrementasse as margens de transferência de capital para atender às necessidades da dinâmica expansionista das áreas mais nevrálgicas da economia nacional. Além disso, o setor industrial açucareiro, com todas as desigualdades existentes entre cada uma das suas unidades, perpetuara os mesmos males que nos seus primórdios parecia destinado a suprimir. Absorvera a terra e monopolizara o capital; estendera, apoiado na política açucareira federal, a grande propriedade monocultora e desestimulara o crescimento de outros ramos agrícolas; debilitara a “ordem tradicional” da zona rural canavieira, sem que estivesse no seu interesse, porém, modificar plenamente o sistema e dar passagem a condições que servissem de base para uma nova estrutura que pudesse absorver, minimizando os conflitos sociais, os

efeitos de seu crescimento. Com a intensificação dos métodos de cultivo a que a seca dera finalmente caráter de urgência, o setor industrial dava os primeiros passos para a resolução definitiva dos seus problemas de economia agrícola de escala, mas esta modernização tão esperada ameaçava agora agravar ainda mais, os conflitos da zona açucareira, suprimindo os segmentos intermediários, desempregando maiores quantidades de mão-de-obra e deixando, em virtude da limitação da produção, grandes espaços rurais improdutivos ou subocupados.

9.5 A primeira tentativa de “racionalização” agrícola em Pernambuco iniciou em 1938, com o capital canalizado para as maiores fábricas pernambucanas –mas não para todo o setor industrial– pela recém-criada Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil e com os recursos do setor bancário privado, possibilitados pela moratória de 1938.⁴³ Mas, essa racionalização, destinada a incrementar o rendimento das terras industriais e a independentizar o ritmo das colheitas da instabilidade sazonal nordestina, foi paralelamente convertida, pelos empresários responsáveis, na ameaça definitiva de exclusão dos plantadores de cana da renda gerada pela indústria açucareira estadual. Assim, funcionando ainda sob o regime de limitação à produção, as usinas que inovavam seus métodos de cultivo poderiam, em questão de poucos anos, satisfazer suas necessidades agrícolas –em relação às suas respectivas quotas de fabricação– com parcelas mínimas das extensas terras de que eram proprietárias, descontando, evidentemente, qualquer necessidade de fornecimento externo.⁴⁴ Para a elite agrária pernambucana, o início deste processo de modernização do secular regime agrícola da zona açucareira, feito sob formas aparentemente dirigidas a complementar sua marginalização, pareceu por o ponto final às suas esperanças de que o crescimento industrial capitalista, nos moldes restritos dentro dos quais se desenvolvera até então em Pernambuco, pudesse ser suficientemente amplo e flexível de modo a permitir-lhe uma participação aceitável nos lucros derivados da acumulação que se realizava à margem do processo de transferência inter-regional de capital, garantindo-lhe, ao mesmo tempo, a continuidade de suas operações agrícolas, com base numa mão-de-obra não assalariada, social e economicamente sujeita às suas propriedades.

9.5.1 A “racionalização”, urgente como era em termos produtivos para a eficiência do complexo açucareiro nordestino nos anos imediatos à seca em face da luta pelo mercado nacional, era também social e politicamente inviável e perigosa. Neste sentido específico, foi combatida pelos plantadores de cana depois de deixar claras suas intenções de realizar uma inovação similar nas suas terras, se o Poder Público lhes oferecesse os recursos necessários, e finalmente desestimulada por um Governo Federal alarmado com as suas possíveis repercussões na ordem sócio-política da zona. Os próprios empre-

sários industriais decidiram adiar suas experiências, talvez advertidos dos perigos inerentes à mudança pela radicalização súbita das posições da pequena burguesia agrária, que respondeu à modernização agrícola, já em 1939, com pedidos de expropriação de latifúndios e leis que estabelecessem o usufruto obrigatório, por parte de plantadores anteriormente deslocados, das extensas áreas que a “racionalização” dos métodos de exploração agrícola e a limitação da produção prometiam deixar ociosas.⁴⁵

9.6 Essa incipiente fase de modernização dos métodos de cultivo foi detida com a ajuda suplementar dos primeiros efeitos da Segunda Guerra Mundial, que desarticulava os transportes e encarecia os insumos necessários à inovação das técnicas. O Governo Federal, olhando no futuro um conflito bélico total, que prometia novamente épocas de auge exportador e incrementos internos da demanda do açúcar que modificariam necessariamente o esquema do equilíbrio comercial praticamente inalterado desde 1934 e que provocariam, com toda certeza, uma reacomodação drástica dentro da hierarquia dos grandes fabricantes do açúcar do País, anunciou o início de uma revisão sistemática da legislação açucareira existente, com vistas a estabelecer, aos dez anos da Depressão, novos ajustes e pautas para o crescimento industrial açucareiro. Dentro desta revisão, prometia-se finalmente a integração institucional e a consolidação efetiva dos grupos intermediários agrários do complexo açucareiro nacional. Em tempo, as necessidades mais urgentes da elite agrária pernambucana foram acalmadas pela virada notável da política do IAA, agora dirigido por Barbosa Lima Sobrinho, que começou a outorgar financiamentos diretos aos trabalhos de entressafra dos plantadores e pequenos fabricantes, enquanto as velhas cooperativas locais, fundadas nas décadas anteriores, e outras novas, que apareciam com o “renascimento” agrícola das zonas açucareiras pernambucanas, transferiam para os principais centros canavieiros do Estado recursos inflacionários liberados pelo *default* da dívida externa de 1938, por meio de instituições financeiras criadas expressamente para esses fins pelo Interventor Federal.⁴⁶

9.7 A revisão do contexto jurídico e institucional do processo de industrialização açucareira, revisão que em Pernambuco teve significados peculiares e chegou a ser pressentida na mentalidade da elite agrária e por ela anunciada como o retomo do prestígio social e da influência política, em nível regional, das Casas-Grandes de engenhos e plantações,⁴⁷ iniciou-se em 1940, com a elaboração, por parte de equipes técnicas do IAA, de vários anteprojetos de reforma da legislação açucareira, que regulava as relações de produção entre usinas e plantadores de cana, anteprojetos que pouco a pouco se converteram numa extensa e complexa peça de legislação corporativa: o Estatuto da Lavoura Canavieira-ELC.⁴⁸ Simultaneamente, a elite agrária pernambucana, congregada em torno do Sindicato dos Plantadores de Cana, elaborou,

como contexto específico da reforma, um “modelo” de desenvolvimento sócio-econômico do Estado, apresentado esquematicamente às autoridades do Governo Federal em inúmeros pronunciamentos dos dirigentes do Sindicato, como uma visão alternativa ao processo ortodoxo de industrialização capitalista que vigorava até então em Pernambuco e que, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, parecia ter adquirido características altamente inconvenientes para o funcionamento do sistema nacional.

9.8 Para os plantadores e senhores de engenho de Pernambuco, a evolução que a sociedade agrária do Estado vinha sofrendo até o momento da aparição das usinas se tinha caracterizado por claras tendências para uma distribuição mais extensa da riqueza, um equilíbrio sócio-econômico mais bem balanceado e, sobretudo, uma participação relativamente mais ampla de senhores de engenho, plantadores, lavradores e pequenos arrendatários nas fontes de renda do Estado. As usinas, concentrando e monopolizando todos os recursos produtivos tinham cortado essa linha de evolução e reinstaurado –“reacionariamente”– padrões de exploração agrícola e posse da terra que já no Século XIX se consideravam plenamente superados. Se uma sociedade agrária com essas bases conseguira manter a ordem estabelecida e as estruturas sociais integradas, minimizando os níveis de conflito e polarização, era uma conclusão lógica que a restauração das bases daquela sociedade –o vigor e a força dos setores intermediários da estrutura social, seus hábitos e seus costumes– poderia proporcionar o alívio imediato das contradições que as usinas haviam extremado, como alternativa aos padrões latifundiários e monocultores das fábricas. Deveria, pois, ser implantado um programa que fortalecesse os proprietários médios e pequenos, que, apoiados por uma adequada infra-estrutura financeira cooperativista e protegidos pelo Estado, poderiam resolver os problemas criados pela concentração de terras, pela deslocação dos cultivos de subsistência para as áreas limítrofes da zona açucareira e pelo desenraizamento da população rural pernambucana. Nessas plantações e nesses engenhos, transformados em núcleos policultores, a população da área encontraria maiores fontes de emprego que nas limitadas capacidades de absorção das usinas açucareiras.

9.8.1 Os pronunciamentos do Governo Federal e das autoridades estatais, nestes anos, reforçaram e confirmaram constantemente as virtudes desta visão que as elites agrárias pernambucanas ofereciam, em substituição do desequilibrado crescimento que resultava da industrialização capitalista. Os engenhos açucareiros –embora não as plantações de fornecimento– foram uma e outra vez indicados, por autoridades e plantadores, como os focos de onde poderia sair um setor agrícola diversificado e independente do setor industrial e, em muitas ocasiões, falou-se novamente em fundar, com base no novo crédito fe-

deral, usinas cooperativas que absorvessem as capacidades produtivas desses fabricantes rudimentares –porém sobreviventes, contra todas as “leis” – sem marginalizá-los dos lucros industriais.⁴⁹

9.8.2 Assim, surpreendentemente, aos 70 anos da proposta inicial, tanto os próprios plantadores de cana e alguns senhores de engenho, quanto altos dirigentes do IAA, ressuscitavam mais uma vez a múmia dos Engenhos Centrais cooperativos. Outra ideia, também já quase centenária, que estivera entre os objetivos primordiais do programa de industrialização montado –porém nunca observado– pelo cada vez mais contemporâneo Congresso Agrícola de 1878, voltava ao terreno das discussões: a separação entre a parte agrícola e a parte industrial do complexo açucareiro. Esta última ideia foi a que aparentemente dirigiu a elaboração –um pouco extemporânea– do Estatuto da Lavoura Canavieira que, quando promulgado, estabeleceu limites às possibilidades de produção agrícola das fábricas, fixando quotas obrigatórias de fornecimento externo de matéria-prima –equivalentes à participação dos plantadores no lucro da fabricação– de pelo menos 40 % das necessidades totais das usinas; condicionou também a distribuição de futuros aumentos nas quotas de produção industrial que viriam com a demanda internacional do pós-guerra, à maior ou menor existência de fornecedores ligados a cada unidade produtiva –medida que foi inutilizada no início do Governo Dutra por “resoluções” do IAA, emendando o Estatuto.⁵⁰ Mais importantes, porém, foram as cláusulas do ELC que instituíam bases para a independência financeira dos plantadores e senhores de engenho, criando fundos especiais destinados a serem distribuídos entre as associações patronais agrícolas, para capacitá-las a competir menos desvantajosamente na atração e na fixação da mão-de-obra, cláusulas que, como efeito tangencial, provocaram um saudável incremento na nómina de sócios contribuintes da Associação dos Fornecedores e Plantadores de Cana. Os fundos especiais colocariam, teoricamente, plantadores e senhores de engenho em paridade de circunstâncias, proporcionando recursos para a construção de escolas, habitações e centros de assistência hospitalar para os trabalhadores rurais –a despeito de que a força de trabalho das plantações e engenhos continuasse constituída primordialmente por moradores e agregados sujeitos mais a uma “condição” do que a um salário.

10 O ELC DOS PLANTADORES: PARTICIPAÇÃO CAPITALISTA E MARGINALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

10.1 No decorrer das discussões dos anteprojetos do Estatuto, os representantes dos plantadores e senhores de engenho pernambucanos, já confiantes no apoio do Governo Federal às suas reivindicações diante do setor industrial,

dedicaram todos os seus esforços para evitar que esse momento de triunfo da “classe” ficasse obscurecido por medidas, contempladas inicialmente nos anteprojetos da lei, dirigidas a incrementar a participação nos lucros da fabricação da mão-de-obra não assalariada que habitava as suas propriedades - possivelmente para evitar a “proletarização”. Nas primeiras revisões, os delegados pernambucanos solicitaram que o Estatuto considerasse como fundo agrícola exclusivo para o seu usufruto, por parte de um só plantador, propriedades máximas de 150 a 200 hectares que eles consideravam a extensão necessária para garantir, com os baixos rendimentos agrícolas da região, uma produção que satisfizesse o nível de vida que merecia toda a família da elite plantadora. Só no caso de propriedades mais extensas –e resguardando esses 200 hectares para o plantador– poderiam então ser considerados os direitos dos moradores e dos lavradores fixados à plantação, como “fornecedores” de cana ao dono do engenho ou, através do proprietário, à usina que contratasse a colheita do plantador.⁵¹ Versões posteriores do anteprojeto foram reduzindo as áreas de usufruto exclusivo, por parte do proprietário ou arrendatário principal, até que, como solução de compromisso, o Estatuto se absteve de estabelecer limites mínimos ou máximos aos fundos agrícolas dos plantadores, deixando a tarefa para ser realizada com base em estudos futuros das condições e “hábitos” peculiares de cada região.

10.2 Fracassados na tentativa de introduzir no Estatuto garantias textuais aos seus interesses em relação aos seus agregados, os plantadores voltaram-se então ao combate de artigos e parágrafos que incluíam os moradores e lavradores dos engenhos e das plantações na categoria de “fornecedores” –mercê da “condição” de fazer plantios próprios de cana para o patrão, em troca de usufruto de uma mísera porção de terra para cultivos de subsistência– e que colocavam plantadores, senhores de engenho e proprietários de usina no mesmo nível de “recebedores” de matéria-prima. Os prolongados debates com os encarregados da elaboração da lei e as descrições, apresentadas pelos delegados patronais pernambucanos, das características específicas das relações sociais de produção nas propriedades rurais –habilmente deformadas pela ótica dos interesses de classe da elite agrária patronal e nunca postas em dúvida pelos representantes do Governo Federal– conseguiram eliminar o perigo de que os habitantes das plantações canavieiras fossem incluídos na categoria de fornecedores, com direitos equivalentes aos dos membros do setor patronal agrícola.

10.2.1 Importante como era este acontecimento para os plantadores e senhores de engenho pernambucanos, não representava, entretanto, nenhuma novidade. Já em 1934 os círculos agrários do Estado tinham resistido com êxito a uma primeira e morna tentativa do Governo Federal em modificar as

condições do trabalho rural na zona açucareira. Enviando sugestões para a elaboração de uma lei sobre as horas dos trabalhos agrícolas, os plantadores e senhores de engenho de Pernambuco –unidos a outros interesses agrícolas minoritários, dentro da Sociedade Auxiliadora da Agricultura– convenceram as autoridades do Ministério do Trabalho de que, se bem esses horários deviam ser aplicados ao trabalho assalariado, era necessário excluir textualmente deles os moradores e lavradores das plantações pernambucanas, por constituírem formas “peculiares” do trabalho agrícola nordestino, carentes das características que justificavam, no caso dos assalariados, a promulgação da lei.⁵² Em 1935, a elite agrária patronal evitou também, com base em protestos de insolvência e ruína inevitável, a aplicação nas plantações e nos engenhos do Estado de uma lei que estabelecia seguros contra acidentes de trabalho, assegurando ao Ministério que as relações “paternalistas” que vigoravam nas propriedades rurais da zona incluíam a assistência do patrão às necessidades de medicamentos e hospitalização para a mão-de-obra rural – além de que as ferramentas usadas na rudimentar agricultura canavieira não representavam maiores riscos.⁵³

10.3 Em 1939, quando finalmente foram decretados pelo Governo Federal os salários mínimos para as zonas rurais do País, a elite agrária pernambucana combateu o nível proposto inicialmente para o Estado e conseguiu a sua redução *inclusive abaixo dos níveis já vigentes em vários municípios da zona açucareira pernambucana*, com o argumento de que, junto a um salário evidentemente reduzido, a mão-de-obra rural desfrutava de “compensações” não-monetárias –casa, terra para cultivos próprios, “direito” de vender os “excedentes”, medicamentos, gastos funerários etc.– que deviam ser computados dentro do salário bruto a ser determinado.⁵⁴ Assim, se em 1934 os círculos patronais das zonas açucareiras pernambucanas se tinham beneficiado das características “peculiares” do grosso de sua força de trabalho, estabelecendo divisões nítidas entre trabalhadores assalariados e moradores, para evitar que estes últimos –sua mão-de-obra permanente– fossem incluídos na lei que regulamentava os horários de trabalho, em 1939 apagavam essas divisões e fundiam trabalhadores rurais e moradores na mesma categoria, para que a mão-de-obra propriamente assalariada –na sua maioria composta por migrantes sazonais da caatinga e do sertão, contratada em troca exclusiva do salário para tarefas de plantio e colheita– aparecessem desfrutando das mesmas “compensações” que na realidade estavam limitadas aos habitantes permanentes das plantações e dos engenhos.

10.3.1 Se esses salários mínimos não fossem estabelecidos na falsa suposição de que *toda* a força de trabalho das plantações e dos engenhos recebia as mesmas condições de emprego, os representantes pernambucanos diante das

Comissões de Salário Mínimo garantiam a ruína dos patrões e, logicamente, o desemprego, a fome e a materialização do radicalismo potencial das massas rurais.⁵⁵ Em 1941, quando das discussões do ELC, o Governo Federal cedeu mais uma vez diante das pressões dos círculos agrários patronais de Pernambuco, que desta vez inverteram o argumento: Se antes tinham falado das retribuições não-monetárias e da “participação” da mão-de-obra permanentes das propriedades rurais no lucro da plantação e da sua renda complementar procedente da comercialização de “excedentes” dos plantios de subsistência, enfatizavam agora a qualidade de “assalariado” que se escondia por trás da figura do morador –com base na remuneração que recebia por seu trabalho na plantação do patrão, na época da colheita– para fazer desaparecer a perigosa ideia de que esses elementos (que, de acordo com os cálculos dos próprios plantadores, apresentados em outros contextos, eram responsáveis diretos por mais de um terço da produção agrícola de cana, engenho e plantação) fossem elevados à categoria de “fornecedores”, movimento que logicamente reduziria de formas drásticas a renda bruta dos setores intermediários entre eles e as usinas que adquiriam a produção.⁵⁷

10.4 A promulgação do Estatuto da Lavoura Canavieira, com o texto significativamente modificado no que diz respeito aos projetos originais, tanto em termos das limitações realmente impostas às usinas, quanto em relação à participação –mencionada, mas anulada pela “lógica conflitiva” da versão final– da população dependente das plantações nos ganhos diretos da fabricação, foi feita sob os protestos eloquentes dos grandes fabricantes pernambucanos. Eles acusaram a lei, primeiro, de ser completamente reacionária, por insistir em dar condições artificiais de existência a um setor agrícola intermediário que não tinha bases próprias para se manter, nem funções a cumprir dentro da nova época aberta pela “racionalização”, e cuja afirmação repercutiria na sanção legal da exploração “excessiva” da mão-de-obra que se dava nas plantações, em contraste com as virtudes das aglomerações proletárias em tomo das usinas, e, depois, de estar inspirada em modelos radicais de esquerda, como o “socialismo agrário mexicano⁵⁷”. Independentemente de ter dado substâncias à acusação de que o Estatuto mantinha intocadas as condições de trabalho nas plantações e nos engenhos ao recomendar a expansão do “paternalismo” para fazer retroceder a proletarianização das massas rurais, o Presidente do IAA respondeu à denúncia dos grandes usineiros sobre a suposta orientação radical do Estatuto, mostrando na justificativa da lei que se tinham seguido claramente as linhas do Direito Agrário da Itália Fascista, bem mais que qualquer tendência revolucionária.⁵⁸

10.4.1 Mas, em contraste com a oposição dos grandes magnatas do açúcar a uma legislação que pretendia cortar as suas possibilidades expansionistas, as justificativas apresentadas pelo IAA ao Poder Executivo Federal, quando da

promulgação do Estatuto, mostravam a harmoniosa integração que se dera a partir de 1937 entre os objetivos globais da política nacional e os interesses particulares das tradicionais e “arcaicas” elites agrárias pernambucanas. A finalidade do ELC era realizar ajustes nos níveis sociais das relações de produção do complexo agroindustrial açucareiro, para evitar que o processo de expansão do capital monopolista, acelerado pelos lucros que se esperavam da época do pós-guerra, desse passagem ao estabelecimento de condições tais de desequilíbrio setorial e regional que provocassem sua própria destruição. A forma escolhida para tornar operacionais esses ajustes era a consolidação dos segmentos intermediários de cada um dos complexos produtores regionais e estatais, a pequena burguesia canavieira, reforçando-a e ao mesmo tempo reforçando os mecanismos de controle que ela construía em torno de suas propriedades, para conter a desintegração da sociedade rural – e permitir, com o fortalecimento dessas barreiras à articulação do descontentamento agrário, que o processo de crescimento industrial continuasse protegido por uma fortalecida pequena burguesia intermediária, que se encarregaria, com seus próprios métodos, de minimizar os riscos sócio-políticos consequentes.⁵⁹ Era finalmente reconhecer, nas características “tradicionais” das elites agrárias pernambucanas e na natureza “pré-capitalista” das relações de trabalho por elas mantidas nas suas propriedades, a relevância funcional de garantias à ordem sócio-política específica que tinha que ser mantida para afirmar o processo de crescimento do capitalismo açucareiro regional - a despeito de que os avanços desse mesmo processo as tivessem privado praticamente de todas as suas posições, como segmentos produtivos de importância dentro da agroindústria pernambucana.

11 A GUIA DE CONCLUSÃO

11.1 Com base nessa contradição, nessa relevância social e política acompanhada pela insignificância produtiva, as elites agrárias pernambucanas conseguiram, nos últimos anos do Estado Novo, a integração consolidada ao processo de crescimento industrial açucareiro que vinham procurando praticamente desde o surgimento das primeiras usinas na Zona da Mata de Pernambuco. No decorrer de um processo de modernização que se ateu aos aspectos técnicos industriais, os plantadores de cana e os senhores de engenho acharam formas e mecanismos para se incorporarem às recompensas desse processo, sem ter que modificar de maneira significativa as bases originais do seu poder. Exatamente porque a não modificação dessas bases era funcionalmente imprescindível para o bom andamento do capitalismo industrial no País, articulado em torno das prioridades de um processo de acumulação que definia diferencialmente os ritmos do desenvolvimento regional.

11.2 Foi a força e a maleabilidade –vale dizer, a ambiguidade e a indefinição– das relações sociais de produção mantidas pelas elites agrárias pernambucanas nas áreas rurais sob sua influência o que as converteu durante a Segunda Guerra Mundial em elementos-chave, no âmbito local, para realizar os ajustes necessários à viabilidade do sistema que teoricamente devia tê-las eliminado e que, de fato, parecia dirigir-se firmemente nessa direção a partir da intervenção federal de 1931 no mercado açucareiro nacional. Foi essa força e essa maleabilidade o que lhes permitiu, conseqüentemente, participar com destaque da repressão aos movimentos de camponeses e operários rurais que se estenderam pelo campo pernambucano entre 1955 e 1964.

11.3 Várias questões, tanto no nível teórico quanto as relacionadas com problemas específicos do conhecimento empírico da realidade agrária nordestina durante o período estudado, parecem aflorar das considerações anteriores. É necessário, porém, antes de chegar a conclusões satisfatórias, aprofundar o estudo da problemática sócio-política e econômica daqueles grupos que, em determinados momentos da evolução histórica da região –e do País– foram deslocados (mas não eliminados) de antigas posições de domínio e controle para reaparecerem ocupando espaços intermediários dentro do processo de produção. Espaços a partir dos quais, embora subordinados e dependentes, ainda conseguem manter e reproduzir alguns dos elementos básicos da sua perdida hegemonia.

11.4 Por enquanto, a experiência pernambucana mostra um processo que permitiu a sobrevivência, paralela ao seu desenvolvimento, de estruturas sociais e sistemas políticos regionais anteriores a seu início, já condenados nos primórdios do século como remanescentes de uma época superada e teoricamente incompatíveis com seu progresso. Um processo, porém, que teve que reafirmar essas estruturas e esses sistemas como ingredientes vitais, sem os quais a situação regional, por ele deslocada do seu eixo, tomaria rumos aparentemente suicidas.

NOTAS

- * Artigo publicado originalmente em Cadernos da Eiap, n° 1, Série Desenvolvimento Agrícola, Rio de Janeiro, FGV/EIAP, 1979.
- ¹ Gillian McGillivray, *Blazing Cane: Sugar Communities, Class, and State Formation in Cuba, 1868-1959*. Durham: Duke University Press, 2009.
- ² Com relação às propostas para a criação dos sindicatos agrícolas vide BELLO, Wenceslao, 'A união da lavoura sob a forma de Sindicatos Agrícolas', in *Primeiro Congresso Nacional de Agricultura, Rio, 1901. Annaes*. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1907, v. 1, p. 247.
- ³ Cf. especialmente as conclusões da Conferência Açucareira da Bahia referentes às novas funções dos sindicatos, in Instituto do Açúcar e do Alcool, *Congressos Açucareiros do Brasil*, Rio, IAA, 1949, p. 124-7.
- ⁴ O Sindicato Agrícola de Goiana, embora subsistisse por vários anos com relativo sucesso, já estava firmemente controlado por interesses nitidamente comerciais – e não agrícolas – em 1913. Vide USAP, *Boletim*, Recife, março de 1913.
- ⁵ Entre 1903 e 1906, foram criados sindicatos agrícolas nos municípios pernambucanos de Itambé, Nazaré, Timbaúba e Goiana, na parte norte da zona da mata; Jaboatão, Recife, São Lourenço da Mata, Pau d'Alho, Victoria, Igarassu e Cabo na parte central; Palmares, Ipojuca, Serinhãem, Rio Formoso e Barreiros na mata sul, enquanto que, também nessa área, Escada, Amaragy, Gabelleira e Bonito formavam um sindicato conjunto. Pelos mesmos anos, organizaram-se sindicatos agrícolas nos seguintes municípios do Agreste: Taquaritinga, Brejo da Madre de Deus, Canhotinho, Garanhuns, Caruaru, Pesqueira e São Bento. No sertão, Floresta, Triunfo e Granito. Cf. PERES, Apollonio e Gaspar PERES, *A indústria açucareira em Pernambuco*, Recife, Imprensa Industrial, 1915, p. 206-7.
- ⁶ Um simples confronto entre os participantes do Congresso Agrícola de Recife de 1878 e os representantes dos Sindicatos Agrícolas da zona açucareira que assinaram a ata constitutiva da União dos Sindicatos Agrícolas de Pernambuco (USAP), quase trinta anos depois, mostra claramente a permanência dos mesmos grupos familiares no controle, ao menos formal, dos assuntos agrícolas da área. Vide 'Ata de instalação da USAP', in USAP, *Boletim*, janeiro de 1913; 'Relação nominal [...] dos membros da Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco que compareceram às sessões do Congresso Agrícola de Recife', in SAAP, *Trabalhos do Congresso Agrícola de Recife em outubro de 1878*, Recife, CEPA PE, 1878. (edição fac-similar), p. 41-50.
- ⁷ DEAN, Warren. *The industrialization of São Paulo, 1880-1945*. Austin, University of Texas Press, 1969, p. 48.
- ⁸ Cf. PERES, Apollonio e Gaspar PERES, op. cit., tabela entre as pp. 102-3; Estado de Pernambuco, Departamento Estadual de Estatística, *Anuário Estatístico de Pernambuco*, 1927, p. 325-9.

- ⁹ SAAP, op. cit., especialmente pp. 294, 315, 379, 398 401 e 413.
- ¹⁰ Diversas atas deste 'Segundo Congresso do Recife' foram publicadas no *Diário de Pernambuco* entre fins de junho e princípios de agosto de 1884.
- ¹¹ Decreto n^o 121 de 11 de novembro de 1892. Citado in PERES & PERES op. cit., p. 113-4. A promulgação desta lei foi uma das mais urgentes reivindicações do Congresso Agrícola de Recife. SAAP, op. cit, p. 315, 401, 413.
- ¹² SALGADO, Paulo de Amorim. Plano de locação de serviços adequado aos engenhos de Pernambuco. In: PNCA. *Annaes*, v. 2, p. 60-2.
- ¹³ Vide, por exemplo, União Agrícola de Jaboatão: 'Regulamento para o lavrador', 1903. Reproduzido in PERES & PERES, op. cit., p. 247-51.
- ¹⁴ Durante o *Primeiro Congresso Católico de Pernambuco*, celebrado no Recife em 1902, foram apresentadas várias propostas para enquadrar o problema da sujeição da mão-de-obra agrícola dentro das perspectivas abertas pela Encíclica. Assim, Luiz Corrêa de Brito, diretor de uma usina no município de Goiana e futuro presidente da USAP, tinha já organizado na sua empresa uma 'corporação operária' e, na base dessa experiência, apresentou ao Congresso um plano destinado a estruturar organizações similares em outros municípios canavieiros. Cf. BRITO, Luiz Corrêa de, 'Estatutos da Corporação Operária dos Engenhos A. B. e C.' e 'Regulamento da Corporação Operária [...]', reproduzidos in *A Semana Agrícola*, Recife, dezembro 14 de 1914. Os documentos foram publicados durante a celebração do *Segundo Congresso Católico de Pernambuco*; até agora foram infrutíferos os esforços por localizar a documentação original; vide também, para efeitos de avaliação da ação da Igreja católica na organização dos trabalhadores agrícolas em princípios do século, Mello, Pe. Olympio, 'Trabalhadores rurais, seus defeitos e sua organização. Trabalho apresentado ao Congresso Católico', in loc. cit. Para um excelente estudo sobre a evolução das funções organizativas da Igreja no contexto dos movimentos operários, vide KADT, Emmanuel de, *Catholic Radicals in Brazil*, London, Oxford University Press, 1970.
- ¹⁵ PERES A PERES, op cit., p. 128-9, reproduzem o texto da lei.
- ¹⁶ Para uma descrição geral das causas e dos efeitos dessa política, cf. FURTADO, Celso, *Formação econômica do Brasil*, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 15a. ed., 1977, p. 172-3; Cf. os protestos dos círculos agrários nacionais - pernambucanos incluídos - in PCNA. *Annaes*, v. 1, p. 14-5.
- ¹⁷ Vide, por exemplo, as considerações nesse sentido de um destacado dirigente da USAP: PONTUAL, Divino, 'Organização agrícola e industrial do açúcar em Pernambuco', in USAP, *Boletim*, março de 1907.
- ¹⁸ O texto do Projeto está, entre outros, in BRANDÃO SOBRINHO, Júlio, *Memorial sobre a Conferência Açucareira de Campos apresentado ao Sr. Diretor Geral da Secretaria de Agricultura pelo representante do governo do Estado (...)*. São Paulo, Typ. Brazil de Rothschild, 1912.

- ¹⁹ As discussões e os debates sobre o Acordo de Campos foram publicados in USAP, *Boletim*, outubro de 1912.
- ²⁰ José Maria Carneiro da Cunha que, junto com Paulo Amorim Salgado, tinha representado a USAP em Campos, debateu os argumentos contrários ao acordo de Davino Pontual nos seguintes termos; 'Não será, certamente, com a estreiteza e aperto, proclamados pelo Dr. Davino, que se modificará a situação da indústria açucareira em Pernambuco [...] O progresso da indústria açucareira entre nós há de se entorpecer porque à meia-dúzia de colegas só convirá a atual situação? Então será o feroz egoísmo de um pequeno número, apavorado pela provável mudança de sua situação de hoje, sobrepujando a situação de quase a totalidade da indústria açucareira, e a que cumpre a todos nós, opor-nos porque não havemos de permanecer atrasados, em imensa maioria, por amor à situação de um insignificante número', CUNHA, José Maria Carneiro da, 'Defesa comercial da indústria açucareira', in *ibidem*, p. 702-26.
- ²¹ O texto do projeto de criação do Banco Rural está reproduzido, na sua versão original apresentada por Corrêa de Brito em 1910, in PERES A PERES, *op. cit.*, p. 129-34; em 1912, o Secretário da Agricultura de Pernambuco informava ao governador Dantas Barreto, numa referência aos resultados das reuniões da USAP: "[...] a agricultura pernambucana acaba de depositar nos altos critérios e no patriotismo de V. Excelência amplos poderes para a resolução do magno problema", cf. MA1A, Heitor da Silva, *Relatório apresentado ao Sr. General Emygdio Dantas [...] pelo Secretário da Indústria, Obras Públicas, Agricultura, Comercio e Hygiene [...]*, Recife, Imprensa d'O Tempo, 1913, p. 33.
- ²² *Mensagem do Governador de Pernambuco*, Sérgio T. Lins de B. Loreto em 6 de março de 1925. Recife, Seção Técnica da República de Publicações Officiaes, 1925, p. 72.
- ²³ Cf. Brasil. Direção Geral de Estatística. *Indústria Açucareira no Brasil*. Rio de Janeiro, Typ. da Estatística, 1919, p. 13; Pernambuco. Departamento Estadual de Estatística. *Anuario Estatístico de Pernambuco, 1929*, Recife, Imprensa Oficial, 1929, p. 380-3.
- ²⁴ Vide 'Estatuto do Centro de Fornecedores de Canas de Pernambuco', in CFCP, *Boletim*, Recife, janeiro 8 de 1919.
- ²⁵ De quase 50 usinas então funcionando em Pernambuco, só 9 decretaram aumentos nos preços da cana pagos ao fornecedor como resultado das negociações com o Centro. Vide 'Relatório apresentado a Conselho em sua reunião a 10 de dezembro pela Diretoria', in CFCP, *Boletim*, 22 de dezembro de 1919. p. 2-3.
- ²⁶ A fagulha que deflagrou a proliferação dos comités de defesa foi, no pano-de-fundo das discussões sobre o CAP e sobre a intervenção estatal na economia 'privada', a apresentação de um projeto de Lei ao Congresso Federal, por parlamentares mineiros, criando um imposto adicional sobre o açúcar produzido no país. O próprio governador de Pernambuco, Manuel Borba, articulou as bancadas dos estados nordestinos produtores para se opor ao projeto. Rio de Janeiro, através de representantes de Campos, também participou do movimento. Em Pernambuco

as Comissões, provavelmente atuando vinculadas aos sindicatos agrícolas, espalharam-se pelos principais municípios canavieiros, realizando verdadeiras campanhas de agitação contra o governo federal. Vide Associação Comercial de Pernambuco. *Relatório apresentado pela Diretoria a 8 de janeiro de 1920*, Recife, Imprensa Industrial, 1920, p. 128-9.

- ²⁷ No final de 1919, a consciência dessa posição subordinada com relação 'ao sul' encontrava uma formulação impecável no protesto do velho Amorim Salgado: 'Eu não sei se é o propósito deliberado dos políticos do Sul impedir o desenvolvimento possível destes estados do Norte até agora mantidos num estado de dolorosa e irritante inferioridade [...]. Os políticos da alta finança consideram as riquezas destes Estados uma boa fonte para encher o nosso tesouro federal, cronicamente vazio, e como se fôssemos colônias a serem exploradas por esses estados do Sul no velho sistema português, lançam-se sobre o nosso açúcar e seus produtos derivados'. SALGADO, Paulo Amorim, 'Imposto sobre o açúcar', in CFCP, *Boletim*, novembro 20 de 1919, p. 1-2,
- ²⁸ A visão de plantadores, senhores de engenho e usineiros de famílias tradicionais com relação à militância operária pode ser observada na série de artigos e transcrições de atas de reuniões desses dias agitados publicados nos números de agosto, setembro e outubro de 1919 do *Boletim* do CFCP. Vide também as atas das sessões mistas realizadas pelo CFCP e pela SAAP, in SAAP, Livro de Atas, 1905-1922.
- ²⁹ Cf. DIAS FILHO, Manuel Santos, 'Pela Agricultura: conclusões da comissão', in USAP, *Boletim*, outubro de 1919, p. 39-41.
- ³⁰ O protesto oficial da 'classe' açucareira pernambucana está in PERES, Gaspar, 'Lavoura e operariado', in CFCP, *Boletim*, novembro 20 de 1919; a Sociedade Nacional de Agricultura indignou-se em termos parecidos: 'As horas de trabalhos agrícolas', in 'A Sociedade Nacional de Agricultura e a produção nacional', *A Lavoura*, Rio de Janeiro, outubro-novembro(?) 1921, p. 297.
- ³¹ As 22 usinas (de um total de 70) que em 1929 se colocaram já claramente como um bloco de oposição política ao governo do Estado e aos círculos industriais que apoiavam-no, foram Catende, Tiama, São João, União e Indústria, Mercês, Matary, Santo Ignacio, Santa Thereza, Jaboatão, Petribu, Bulhões, Bom Jesus, 13 de Maio, Pumaty, Agua Branca, Cruangy, Ipojuca, Sant'Anna de Aguiar, N.S. Auxiliadora, Uruhaé, Barra e Pery-Pery. Em agosto de 1929, diretores e proprietários das referidas fábricas, liderados pelos irmãos Lima Cavalcanti, as mais notórias cabeças da oposição política à oligarquia pernambucana, publicaram um 'Memorial'. No documento demandava-se a dissolução da Cooperativa Açucareira de Pernambuco, organismo que, firmemente nas mãos de Coimbra e seu grupo, controlava a comercialização –preços e volumes– da maioria do produto pernambucano. Com a extinção da Cooperativa, a dissidência industrial pretendia possibilitar a livre venda do açúcar aos preços –baixos– existentes, sem ter que submeter-se ao compasso de espera que Coimbra tinha decretado na esperança, no final de 1919, de uma súbita recuperação do mercado. O 'Memorial' foi publicado in *Diário da Manhã*, 8 de agosto de 1929.

- ³² Os fundamentos concretos dessa oposição político-empresarial ao governo de Coimbra e ao grupo de usineiros que controlavam o esquema de comercialização do açúcar pernambucano parecem definir-se nitidamente quando comparados ambos os lados em termos de capacidade produtiva e, conseqüentemente, em termos de capacidade de expansão: entre as usinas opositoras predominavam unidades produtivas com capacidades variáveis de moagem entre 300 e 500 toneladas de cana em 22 horas, enquanto que 22% delas tinham capacidade superior a 500 toneladas. Por contraste, dentre as usinas que apoiaram o governo de Coimbra —e, por extensão, de Washington Luiz— até o fim, a capacidade predominante de produção situava-se entre 100 e 300 toneladas diárias. Médias e grandes na oposição, pequenas e médias no poder. Era, aparentemente, o nascimento de uma verdadeira burguesia industrial capitalista. Para o confronto das capacidades produtivas dos grupos opositores, vide Pernambuco, Departamento Estadual de Estatística, *op. cit.* Institucionalizando a dissidência, a Sociedade de Usineiros de Pernambuco foi instalada nesse mesmo ano por iniciativa da oposição. Já em outubro de 1929, as reuniões da Sociedade (SUP) discutiam a conveniência de afastar Coimbra do Poder exatamente um ano antes da sua discreta fuga do Palácio das Princesas. *Diário da Manhã*, 30 de outubro de 1929.
- ³³ A única manifestação concreta do Centro (agora convertido em Centro dos Fornecedores e Plantadores de Cana de Pernambuco, CFPCP) com relação à crise político-econômica de 1929, foi uma moção de confiança ao governo estadual, aprovada em agosto de 1929. 'Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 6 de agosto de 1929', in CFPCP, Livro de Atas, 1928-1933.
- ³⁴ O novo regulamento da Cooperativa Açucareira de Pernambuco, apresentado pelas usinas opositoras, foi aprovado em setembro de 1929. O controle da oposição estava implícito no fato de que o peso do voto nas decisões da organização era agora proporcional ao capital com que cada unidade participava da Cooperativa e na constatação de que as maiores usinas do Estado, Catende, Tiama, União e Indústria etc., faziam parte dos signatários do 'Memorial' de agosto. O regulamento foi publicado no *Diário da Manhã*, 18 de setembro de 1929.
- ³⁵ A possibilidade de decretar um *lockout* estava sendo estudada por plantadores e senhores de engenho desde setembro de 1931, para forçar o governo revolucionário a intervir na regulamentação das relações entre usinas e abastecedores. Uma intencional contra-revolucionária em outubro (vide pp. segs.) interrompeu as deliberações, mas ofereceu aos plantadores uma oportunidade dourada para mostrar ao Governo Provisório, ao mesmo tempo, a sua lealdade para com a Revolução e a sua capacidade de organização e resistência armada, se necessário. Em novembro de 1931, uma assembleia de plantadores, em vista dos 'preços vis a que chegou neste momento o açúcar', aconselhou suspender o corte de cana e o fornecimento às usinas; nova assembleia, em dezembro, decretou a suspensão das atividades agrícolas em plantações e engenhos para os primeiros dias de janeiro de 1932. A suspensão iniciou-se no dia 7 de janeiro e foi interrompida no dia 17, pela intervenção pessoal de Lima Cavalcanti, agora não mais um opositor, mas o próprio Interventor Federal em Pernambuco. Dias depois, Vargas o autorizava a 'baixar um

decreto regulando as relações comerciais entre fornecedores e usineiros'. A intervenção do Estado foi recebida pelo presidente do CFPCP como, paradoxalmente, 'mais uma esplêndida vitória do espírito liberal e democrático de Pernambuco'. Vide 'Crise do Açúcar', novembro 4 de 1931 e 'Diretoria do CFPCP e Diretoria da SAAP a Ministro Collor', mesma data, in CFPCP, *Cartas e Offícios, 1931-1934*; 'Assembléia Geral Extraordinária de 21 de dezembro de 1931', in *Ibid.*, Livro de Atas, 1929-1933; Marcionillo Lins, presidente do CFPCP, aos fornecedores de Pernambuco, janeiro de 1932, in CFPCP, *Cartas e Offícios, 1929-1934*. O texto do decreto (nº 111) está reproduzido in VELLOSO, Lycurgo, *Legislação açucareira e alcooleira*, v. 1 (1931-1952). Rio de Janeiro, IAA, 1954, p. 258-9, DÉ CARLI. Gileno, *O processo histórico da usina em Pernambuco*, Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti Editores, 1942, p. 52. Com o início da moagem, 61 das 70 usinas negaram-se a acatar o decreto e nova paralisação dos plantadores estourou em 3 de novembro de 1932, estendendo-se até 14 do mesmo mês, quando Vargas novamente apoiou Lima Cavalcanti e autorizou-o a aplicar medidas rigorosas contra os recalitrantes. Cf. 'Assembléia Geral Extraordinária de 14 de novembro de 1932', in CFPCP, Livro de Atas, 1929-1933.

³⁶ SAAP, Sobre a economia nacional. *Memorial ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho*. Recife, Typ. 'Diário da Manhã' 1931, p. 8-13.

³⁷ O argumento foi desenvolvido e aperfeiçoado para contrabalançar a revolta dos setores açucareiros paulistas e mineiros, ambos, em graus diferentes, em plena etapa de expansão, contra a limitação da produção açucareira. Cf. do lado dos interesses pernambucanos, a entrevista concedida por Joaquim de Arruda Falcão, à época presidente do SUP in *Economia e Agricultura*, Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1933, p. 1-2. Para maior detalhe na exposição vide LEITE, Edgar Teixeira. "A situação da indústria açucareira do País antes e depois da intervenção do governo federal". Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, reproduzido in *Brasil Açucareiro*, Rio de Janeiro, outubro de 1935, p. 81-91. A sagração oficial do argumento pernambucano, como 'Política Nacional do Açúcar', está cristalinamente exposta in TRUDA, Leonardo, *A defesa da produção açucareira*, Rio de Janeiro, IAA, 2a. ed., 1971, p. 51. Cf. também a elegante elaboração feita pelo seu sucessor na direção do Instituto, in BARBOSA LIMA SOBRINHO, Alexandre José, 'Os fundamentos nacionais da política do açúcar', in *Ibid.*, *A ação do Instituto do Açúcar e do Alcool. Relatório do Sr. [...] como presidente da Comissão Executiva, no período de maio de 1938 a abril de 1946*. Rio de Janeiro, s/e. 1946. p. 154-9.

³⁸ Em outubro de 1931, Pernambuco viveu dias de grande agitação por causa de uma revolta armada aparentemente 'contra-revolucionária'. Os plantadores de cana, não obstante estarem nesses precisos momentos se queixando do descaso da 'revolução triunfante' às suas reivindicações, colocaram-se imediatamente ao lado dos novos donos do poder. Enquanto que as tropas estaduais imobilizavam-se no Recife, sufocando os distúrbios, os senhores de engenho e os plantadores, a frente de grupos de moradores e agregados, controlavam rapidamente a situação nos municípios da zona da mata. Desta forma consolidavam, com mecanismos nascidos da política oligárquica republicana, o poder de uma revolução que tinha sido

feita para acabar —pelo menos assim o declaravam seus dirigentes— precisamente com esse tipo de mecanismos. Em nota à imprensa, depois de esmagada a revolta, os plantadores declaravam: ‘Foram muitos os agricultores que deram entrada nesta capital ao lado das tropas que vinham dar combate aos rebeldes e na organização da defesa da manutenção da ordem pública, pelos municípios, os senhores de engenho honraram as suas tradições’, ‘Nota da Diretoria do CFPCP’, novembro de 1931. In CFPCP, *Cartas e Offícios*, 1931-1934. Como curiosidade, vale ressaltar que conceitos quase idênticos sobre a lealdade dos plantadores ao poder foram emitidos nos primeiros dias de abril de 1964 pelos dirigentes da Associação dos Fomecedores de Cana de Pernambuco; por outro lado, representantes dos militares que tomaram o poder em Pernambuco nesses dias renderam homenagem aos plantadores de cana pelos seus esforços em prol da ‘consolidação da democracia’. Vide ‘Reunião ordinária da Diretoria’, abril 6 de 1964, in AFPCP, *Livro de Atas* 1962-1964.

- ³⁹ Vide ‘Memorial ao Interventor Federal sobre despejos de fornecedores por usinas que negam-se a financiar a safra’, novembro 13 de 1931, in CFPCP, *Cartas e Offícios*, 1931-1934. Nos inícios do ‘êxodo’ dos arrendatários, os dirigentes do Centro suspeitavam que se tratava de uma manobra para evitar a sindicalização: ‘Circular do Centro aos fornecedores rendeiros’, dezembro de 1931, in loc. cit. Na entressafra de 1932, quando os esforços para manter os arrendatários nas terras das usinas pareciam haver sido inúteis, o CFPCP propôs, através dos seus representantes na Câmara Federal, que fossem expropriadas ‘por utilidade do povoamento nacional as grandes usinas que despovoam o território expulsando os lavradores e restaurando as sesmarias coloniais’. Marcionista Lins e Augusto Cavalcanti, maio de 1932, *ibid.*; ‘Memorial ao Interventor Federal sobre a ampliação dos prazos de arrendamento’, janeiro 4 de 1933, *ibid.*; ‘Presidente do CFPCP a Presidente da República’, janeiro de 1933, *ibid.* Tentativas de negociações diretas entre o Centro e o Sindicato (ex-Sociedade) dos Usineiros de Pernambuco para deter o processo de expulsão também foram feitas sem maior sucesso. Vide Aurino Duarte, presidente do CFPCP a Batista da Silva, presidente do SUP. ‘Proposta de Modus Vivendi entre fornecedores e usineiros’, dezembro 24 de 1933, *ibid.* Como última esperança, uma comissão do CFPCP entrevistou-se em janeiro de 1934 com os Ministros de Trabalho (Salgado Filho) e da Agricultura (Juárez Távora), porém cada um deles recusou competência e apontou o outro como o responsável. Aurino Duarte a Deputado Augusto Cavalcanti, novembro de 1933; *ibid.* a Ministro Oswaldo Aranha, mesma data; ‘Circular aos consocios sobre fornecedores rendeiros’, janeiro 18 de 1934; ‘Aurino Duarte a Ministro Salgado Filho’, mesma data. Todos in CFPCP, *op. cit.* Vide, Finalmente, as conclusões desalentadoras da comissão sobre a resolução do problema, estão em ‘Severino Mariz a Aurino Duarte’, maio 20 de 1934, in SPCP, *Documentos da Comissão*, 1934. Já nesta última data, porém, a ótica dos plantadores quanto às motivações das usinas para expulsar os rendeiros tinha sido consideravelmente modificada; antes de ser um problema ligado à sindicalização, as expulsões vinculavam-se às melhorias nos preços do açúcar em virtude da intervenção estatal: ‘Atraídos pelos melhores preços, os proprietários das usinas que também são proprietários de vastos domínios territoriais adjacentes, pretendem

para eles não só apenas o lucro industrial como ainda o da exploração'. 'Memorial ao Ministro da Agricultura, sobre despejo de fornecedores pelas usinas e problemas de financiamento', maio de 1934. In 'Relatório da Comissão, anexo 8', SPCP, op. cit.

- ⁴⁰ Gileno Dé Carli explorou pioneiramente o fenômeno da expansão dos cultivos próprios das usinas pernambucanas, chegando porém à conclusão errada de tratar-se de um movimento geral do setor industrial açucareiro no Estado. Uma análise, mesmo superficial, dos dados estatísticos que ele fornece para fundamentar sua interpretação (congruente e linear), mostra no entanto que a expansão dos cultivos foi um fenômeno limitado, durante o período 1932-1939, às 2 ou 3 maiores fábricas, ao tempo que a grande maioria das usinas –de menor capacidade– mantinham ou, inclusive, aumentavam sua dependência do fornecimento externo. Cf. DÉ CARLI, op. cit., p. 113-27.
- ⁴¹ Vide o discurso de Teixeira Leite, citado na nota 36. Durante os momentos mais graves da crise de 1929-1932 foram constantes os documentos dos plantadores que apelavam ao Governo Federal para intervir a seu favor, sob pena de ter que enfrentar desemprego em massa e agitação incontrolável na zona açucareira. O argumento foi incessante durante todo o período de Vargas, e foi gradualmente melhorando na sua apresentação e nos seus efeitos apocalípticos. Em 1934, os problemas de financiamento dos plantadores foram por eles ideologicamente apresentados ao Governo Federal como causas de uma crise iminente de desemprego dos trabalhadores rurais, desemprego que “possivelmente os levará a atos de desespero”. Aurino Duarte a Deputado Severino Mariz’, maio de 1934. In SPCP, Documentos da Comissão, 1934.
- ⁴² O terror da violência de trabalhadores desempregados e flagelados que a seca de 1936-1938 espalhou pelo Estado levou o próprio Lima Cavalcanti, já governador de Pernambuco, a fazer dramáticas solicitações de auxílio federal. Cf. 'A Crise açucareira do Nordeste. Pernambuco solicita o auxílio financeiro da União', in *Brasil Açucareiro*, dezembro de 1936, p. 260. Para Truda, ainda presidente do IAA, o desemprego provocado pela seca fazia das levas de flagelados e desocupados 'lamentável fator de subversão e presa fácil de sugestões deletérias'. Leonardo Truda a Presidente da Associação Comercial de Maceió, reproduzido in *ibid.*, p. 22. Em janeiro de 1937, os plantadores, sem condições de reter sua força de trabalho, anunciavam alarmados que no interior forjava-se uma 'grave crise que ameaça a ordem pública'; dias depois, em comunicação ao Ministro do Trabalho, informavam que já tinham acontecido os "primeiros ataques" contra engenhos e casas grandes. Mario Lins de Mello a Carlos de Lima Cavalcanti, janeiro 15 de 1937; *Ibid.*, a Leonardo Truda, janeiro 22 de 1937; *Ibid.* a Agamenón Magalhães, mesma data, todos 43 in SPCP, Correspondências remetidas e recebidas, 1936-1937.
- ⁴³ Não foram pesquisados dados precisos sobre o volume dos recursos canalizados pela Carteira aos usineiros pernambucanos, porém existem várias fontes secundárias que fazem referência a esse financiamento notadamente CHATEAUBRIAND, Assis, 'MandaChuva', in *O Homem e a terra na Usina Catende*, Recife, s/e., 1941, p. 13-6.

- ⁴⁴ A Usina Catende, por exemplo, era proprietária de uma extensão calculada, no início da década de 1940, em 27.000 hectares; destas, 12.000 eram normalmente ocupadas com a cana necessária para preencher a quota de produção autorizada pelo IAA. Estimativas contemporâneas à época da ‘racionalização’ indicavam que, com a modernização técnica dos métodos de plantio, irrigação, adubação intensiva etc., Catende precisaria só de 3.000 hectares de cana para produzir o açúcar da sua quota’ Cf. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. ‘A transformação da usina’, in *ibid.*, p. 21.
- ⁴⁵ “Parecer da Comissão sobre a concentração das terras”, maio 29 de 1939, in SAAP, Correspondências recebidas e expedidas, 1938 1943; proposições dessa natureza encontram-se também nas atas das assembleias de 17 de abril, 29 de maio e 10 de julho de 1939, *Ibid*, Livro de Atas, 1938-1944.
- ⁴⁶ O primeiro empréstimo para banguzeiros, no valor de 252 contos de réis, foi liberado pelo IAA em fevereiro de 1937 através da Caixa de Crédito da Federação das Cooperativas de Pernambuco, um fantasma sobrevivente da Primeira Guerra Mundial; o empréstimo foi renovado para a safra 1938/1939. Vide ‘Empréstimo aos bangüezeiros de Pernambuco’, in *Brasil Açucareiro*, maio de 1938, p. 147. Em julho de 1939, depois de ignorar a produção de açúcar de engenho desde sua criação, o IAA incorporou finalmente os pequenos produtores dentro dos seus mecanismos de financiamento, estabelecendo pela primeira vez preços mínimos de garantia para sua produção: ‘Sessão conjunta do SPCP e da SAAP’, julho 10 de 1939; ‘Decreto-lei 1.831 de 4 de dezembro de 1939. Dispõe sobre a defesa da produção do açúcar e dá outras providências’, especialmente o cap. 4: ‘Defesa do açúcar do tipo inferior’, in VELLOSO, op. cit., v. 1, p. 354-94. Em 1938, Agamenón Magalhães tinha criado a Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco, destinada ao financiamento específico de produtores agrícolas e pecuários, cf. *A Auxiliadora da Agricultura*, Recife, agosto de 1938, p. 11. Entre a data da fundação da CCBP e 1945, o IAA canalizaria um total de 19 milhões de cruzeiros para financiar as atividades agrícolas na Zona da Mata, cinco dos quais para os pequenos produtores e 14 para os fornecedores de cana. Vide BARBOSA LIMA SOBRINHO, *A Ação do Instituto [...]*, p. 236.
- ⁴⁷ Essa sensação de retorno aos idos coloniais é contemporânea à instauração do Estado Novo. Em 1938, por exemplo, começaram a aparecer nos municfpios canavieiros “clubes culturais” compostos por plantadores e senhores de engenho, que realizavam sessões nostálgicas e saudosistas, comentando os livros de Gilberto Freyre e de Júlio Bello, especialmente *Memórias de um senhor de engenho*, sintomaticamente publicados nesse mesmo ano. Anunciando a formação desses grupos, o órgão da SAAP dizia; “Quando esse movimento se alastrar e se intensificar, as Casas-Grandes terão adquirido o seu prestígio. E voltarão a exercer a mesma influência de outrora sobre a vida social e econômica de Pernambuco”, *A auxiliadora da Agricultura*, julho de 1938, p. 4. Em agosto desse ano, o prefeito de Recife –aliás, formosa vingança, de sólida e impecável tradição de senhor de engenho– declarava: “Pernambuco tem nos seus velhos engenhos os mais vivos marcos de uma existência econômica, social, política e religiosa. E se Pernambuco

não pode morrer nunca, claro está que os seus velhos engenhos terão que viver sempre”, NOVAIS FILHO, Antonio de, ‘Engrandeceram Pernambuco’, in *ibid.*, outubro-novembro de 1938, p. 5.

- ⁴⁸ Decreto-lei n° 3.855 de 21 de novembro de 1941. *Estatuto da Lavoura Canavieira*. In VELLOSO, op. cit., v. 1, p. 461-521.
- ⁴⁹ Agamenón Magalhães jogava, freqüente e alegremente, farta lenha na fogueira da ‘restauração’. Assim, dizia em 1939: “com assistência e crédito o engenho criará outra civilização”. “A defesa do Bangüê”, in *Folha da Manhã*, dezembro 14 de 1939. De Carli, então alto funcionário do IAA, apoiava também a sobrevivência de engenhos e plantações, por “justiça social”: “(.. .) pela própria natureza do seu trabalho [seus proprietários] têm um contato mais íntimo com os trabalhadores. Suavizam as distâncias e amenizam os contrastes”. Reproduzido in ‘A questão dos preços do açúcar’, *Brasil Açucareiro*, janeiro de 1940, p. 26. A múmia dos Engenhos Centrais foi novamente convocada por Barbosa Lima Sobrinho. Vide *A Ação do Instituto*. [...], p. 107.
- ⁵⁰ VELLOSO, op. cit., v. 1, p. 480.
- ⁵¹ ‘Sugestões. Anteprojeto do ELC’, julho 8 de 1940, in SPCP, Correspondências remetidas e recebidas, 1938-1939. Vide também os debates sobre este problema na reunião de usineiros, plantadores e senhores de engenho de todo o Brasil, convocada pelo IAA para discutir o ELC, in IAA, *Conferência Canavieira de 1941*. Pref. de Barbosa Lima Sobrinho. Rio, IAA, 1943, p. 177 e segs. Naturalmente, moradores e trabalhadores rurais foram ‘representados’ pelos seus empregadores.
- ⁵² ‘Sugestões ao Ministro do Trabalho sobre o projeto de regulamentação do Trabalho Rural’, maio de 1934. In SPCP, Documentos da Comissão, 1934. O anteprojeto de decreto enviado aos plantadores para comentários foi reproduzido in *A Lavoura*, fevereiro de 1934, p. 55-8.
- ⁵³ Aurino Duarte, Presidente do SPCP, a Ministro do Trabalho, agosto 24 de 1935; *Ibid.* a Francisco Lyra, Presidente do Sindicato Agrícola de Goiana, agosto 30 de 1935. Ambos in SPCP, Correspondência recebida e enviada, 1935-1936. Barão de Suassuna, presidente da SAAP, a Ministro do Trabalho, dezembro de 1935; *Ibid.* a Barbosa Lima Sobrinho, mesma data; *Ibid.* a Presidente da República, mesma data. In SAAP, *Offícios e cartas expedidos, 1934-1936*.
- ⁵⁴ SPCP, ‘Reunião ordinária com a SAAP’, agosto 21 de 1939. In SPCP. Livro de Atas. 1934-1943. Queixando-se dos perigos da implantação do salário mínimo rural, os representantes de um dos sindicatos agrícolas da zona da mata advertiam que, se essa medida fosse aprovada, ‘vamos ter um verdadeiro terremoto na nossa organização do trabalho rural, que sempre foi julgada por todos os espíritos superiores estrangeiros [...] como o melhor e o mais interessante do mundo (sic, sic.). Sindicato dos Agricultores de Vitória a SPCP, agosto 8 de 1938, in SPCP, Correspondência remetida e recebida, s 1938-1939
- ⁵⁵ Os plantadores alegavam que o salário mínimo rural provocaria, na realidade, a perda do salário do trabalhador ‘porque será decretar vertiginosamente a ruína

dos produtores e logicamente como consequência uma situação ainda mais precária para os homens do campo'. Cf. 'Memorial do SPCP à Comissão do Salário Mínimo', parcialmente reproduzido in 'Ata da reunião da Diretoria', outubro 23 de 1939. In SPCP, Livro de Atas, 1934-1939.

⁵⁶ Vide IAA, op. cit., pp. 175-184.

⁵⁷ As objeções dos maiores usineiros foram fundamentadas nos diversos 'pareceres' sobre os anteprojetos do ELC, por eles encomendados a vários juriconsultos. Vide entre outros SILVA, Romeu Rodrigues, *Parecer sobre o Anteprojeto de "Estatuto da Lavoura Canavieira"*, Rio, Gráficos Bloch, 1941; KAFFURI, Jorge Felipe, *A situação da indústria açucareira no Brasil Parecer em torno do anteprojeto de Reforma da Lei 178*, Rio, Gráficos Bloch, 1941; o ataque mais impiedoso contra o ELC está, porém, nos comentários de um usineiro mineiro: BOUCHARDET, Mário, *Em torno do Anteprojeto do Estatuto Canavieiro*. Rio, s/e., 1941. Representantes dos interesses industriais dentro do governo pernambucano também atacaram diretamente o ELC. Apollonio Sales, então Secretário da Agricultura e ex-técnico gênio de várias das maiores usinas da zona sul - a 'racionalização' tinha sido iniciada sob sua orientação - afirmava que, entre outras coisas, o ELC manteria viva uma classe totalmente 'desnecessária', cuja única possibilidade de sobrevivência era a exploração cada vez mais brutal do trabalhador. Cf. SALES, Apollonio, 'Projeto apresentado pelo Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio ao Exmo. Sr. Interventor Federal em Pernambuco, contendo as modificações que julga necessário adotar no Projeto de reforma da Lei n° 178', in Secretaria da Agricultura, Indústria e Comercio de Pernambuco, *Boletim*, novembro de 1941, p. 113-5.

⁵⁸ A justificativa do ELC foi posteriormente publicada em forma de livro. Cf. BARBOSA LIMA SOBRINHO, Alexandre José, *Problemas econômicos e sociais da lavoura canavieira* Rio, Zélio Valverde, 2° ed., 1943. O autor explicava a inspiração na Itália do Duce não como a penetração de 'influências exóticas', como afirmavam os inimigos da lei, e sim como 'simples coincidência de problemas e soluções', op. cit., p. 269. Outras identificações explícitas do ELC como os modelos fascistas italianos estão in 'Política Açucareira', *Brasil Açucareiro*, junho de 1941, p. 6.

⁵⁹ Barbosa Lima, justificando o interesse do ELC no fortalecimento da pequena propriedade raciocinava que a grande exploração seguia a 'lei da concentração' marxista, e implicava na proletarianização em massa e, conseqüentemente, na formação das condições próprias para uma revolução operária. Assim, 'a defesa da pequena propriedade e da pequena exploração tem, pois, entre outras expressões, o sentido de um movimento adverso à doutrina e influência do socialismo marxista', in op. cit., p. 94-9.

